

CONTESTACION ACCION DE TUTELA N° 2024-00577 JAIME ANDRES CARMONA SUAREZ Y JOHANA ANDREA POSADA PRIETO

Desde Respuestas OJD <respuestasojd@putumayo.gov.co>

Fecha Mar 19/11/2024 10:59 AM

Para Juzgado 03 Penal Municipal - Putumayo - Mocoa <j03pmpalmoc@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC gestiopasto@yahoo.es <gestiopasto@yahoo.es>

 2 archivos adjuntos (17 MB)

DOCUMENTOS CON ESCRITURA ANDRES PABLO RODRIGUEZ.PDF; CONTESTACION ACCION DE TUTELA N° 2024-00577 JAIME ANDRES CARMONA SUAREZ Y JOHANA ANDREA POSADA PRIETO.PDF;

Doctora:

TANIA MARCELA MARTINEZ MUÑOZ

Juez Tercero Penal Municipal de Mocoa

E.S.D

ASUNTO: INFORME ACCIÓN DE TUTELA

RADICACION: 2024-00577

ACCIONANTE : JAIME ANDRES CARMONA SUAREZ Y JOHANA ANDREA POSADA PRIETO

ACCIONADO: DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

Cordial saludo.

De manera atenta remito contestación de acción de tutela de la referencia, para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

Oficina Jurídica Departamental.

Gobernación del Putumayo.

--

SE INFORMA QUE ESTE CORREO ELECTRÓNICO ES ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA EL ENVÍO DE RESPUESTAS POR PARTE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO, NO SE TENDRÁN EN CUENTA LOS DOCUMENTOS QUE SE REMITAN POR ESTE MEDIO, TODA VEZ QUE NO ESTÁ SUJETO A SUPERVISIÓN.

POR FAVOR NO RESPONDA ESTE CORREO.

Si tiene alguna inquietud, puede hacerlo remitiendo su solicitud a la cuenta de correo electrónico notificaciones.judiciales@putumayo.gov.co



San Miguel de Agreda de Mocoa, 19 de Noviembre del 2024

Doctor:

TANIA MARCELA MARTÍNEZ MUÑOZ

Juez Tercero Penal Municipal de Mocoa

j03pmpalmoc@cendoj.ramajudicial.gov.co

E. S. D.

ASUNTO: Informe Acción de Tutela

RADICACIÓN: 2024-00577-00

ACCIONANTE: Jaime Andrés Carmona Suárez y Johana Andrea Posada Prieto

ACCIONADO: Departamento del Putumayo

ANDRÉS PABLO RODRÍGUEZ SOSA, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en mi calidad de Jefe de la Oficina Jurídica del Departamento del Putumayo, actuando en calidad de Jefe de la Oficina Jurídica del Departamento de Putumayo y en virtud del Manual de Funciones de esta entidad -Decreto 0232 del 15 de agosto de 2019, I. Identificación del Empleo: Jefe de la Oficina Asesora; II. Área Funcional: Oficina Asesora Jurídica; IV. Descripción de las funciones esenciales: Numeral 9. "Resolver oportunamente las solicitudes relacionadas en ejercicio del derecho de petición y acciones constitucionales", encontrándome dentro de los términos, procedo a presentar Informe sobre la Acción de tutela de la referencia, en los siguientes términos:

I. ANTECEDENTES PROCESALES.

1. Los señores JAIME ANDRÉS CARMONA SUÁREZ y JOHANA ANDREA POSADA PRIETO, presentan acción de tutela contra el Departamento del Putumayo y el Grupo Bancolombia, en el entendido que les han vulnerado sus derechos fundamentales, con unas medidas cautelares que recaen sobre las cuentas bancarias de los tutelantes.



2. El día 28 de octubre de 2018 se constituyó acuerdo de CONSORCIO VÍAS TERCIARIAS con el fin de presentar propuesta y participar en el proceso de selección de Licitación Pública No. SID-LP-010-2018, en el cual se consignó que la representación legal del consorcio estaría a cargo de Luis Alfredo Muñoz Becerra, identificado con Cédula No. 1.124.313.123 de Colón.
3. Entre el Consorcio Vías Terciarias con Nit No. 901240955-6 y el Departamento del Putumayo se suscribió el contrato de obra No. 1225 del 28 de diciembre de 2018, cuyo objeto es Mejoramiento de Vías terciarias para una paz estable y duradera en los 2 municipios del Departamento del Putumayo, con un plazo inicial de quince (15) meses y un valor de \$ 24.417.417.608 M/CTE.
4. El 26 de Junio de 2020 el Consorcio Vías Terciarias presento solicitud de autorización y modificación de los miembros del consorcio.
5. Asume como representante legal del Consorcio Vías Terciarias el señor ARIEL NARVÁEZ DELGADO, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 12.745.251, con facultad para firmar todas las determinaciones que sean necesarias en la ejecución y liquidación.
6. Se declara el incumplimiento del Contrato de obra No. 1225 del 28 de diciembre de 2018 por parte del Consorcio Vías Terciarias, razón por la cual se expide la Resolución No. 059 del 24 de Junio de 2024 resolviendo librar mandamiento de pago y decreta medida de embargo y secuestro preventivo de bienes muebles e inmuebles, así como también dineros depositados a nombre de los deudores representantes legales señores ARIEL NARVÁEZ DELGADO, JAIME ANDRÉS CARMONA SUÁREZ y JOHANA ANDREA POSADA PRIETO, con el ánimo de satisfacer la obligación a favor del Departamento del Putumayo de acuerdo al artículo 12.3 del Decreto 325 de 2017, en concordancia con el artículo 837 y 838 del Estatuto Tributario.
7. Mediante Resolución No. 077 del 9 de agosto de 2024, se resuelven excepciones presentadas contra el mandamiento de pago.
8. Se expide el oficio No. 1510 del 12 de agosto de 2024 por medio del cual se da respuesta a la petición impetrada por el señor JAIME ANDRÉS CARMONA SUÁREZ en calidad de Representante legal de Construcciones y Obras de Ingeniería Alfa y Omega SAS.
9. Se expide el oficio No. 1511 del 12 de agosto de 2024 por medio del cual se da respuesta a la petición impetrada por la señora JOHANA ANDREA POSADA PRIETO en calidad de Representante legal de Construcciones y Obras de Ingeniería Fenix SAS.
10. Se resolvió la solicitud de Revocatoria contra los oficios No. 1510 y 1511 instaurada el 16 de septiembre de 2024 por el Dr. HUGO SALAZAR PELÁEZ en calidad de apoderado judicial de los señores Jaime Andrés Carmona Suárez



y Johana Andrea Posada Prieto., negándose la petición y siguiendo adelante con la ejecución.

Teniendo en cuenta que la Compañía Mundial de Seguros, realizó el pago del valor del siniestro lo que se persigue con los deudores es el pago de los intereses corrientes y moratorios que genero el anticipo entregado al contratista, razón por la cual los deudores deben responder a la Gobernación del Putumayo por este concepto. La Falta de pago de estos intereses implica que la entidad Pública no está recibiendo el beneficio económico correspondiente, lo que puede impactar su situación financiera y su capacidad para llevar a cabo sus proyectos. El Departamento del Putumayo no puede soportar detrimentos o perjuicios causados por el incumplimiento del contrato ni mucho menos por la irresponsabilidad del contratista y posteriormente por el incumplimiento de pagar por parte de la aseguradora los perjuicios causados por el incumplimiento del contrato.

La suma adeudada por este concepto se estima en \$ 4.893.197.302,29 los que se discriminan de la siguiente manera:

- Intereses corrientes la suma de CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (\$4.189.973.000,65).
- Intereses moratorios conforme al artículo 1080 del código de Comercio, de SETECIENTOS TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$703.224.301,64)

La funcionaria ejecutora competente para adelantar procesos por jurisdicción coactiva a favor del Departamento del Putumayo, con base al título ejecutivo allegado por la oficina de contratación del Departamento del Putumayo, la funcionaria ejecutora dio inicio al proceso 2024-007 contra **COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.** identificada comercialmente con Nit. 860.037.013 6, **CONSORCIO VIAS TERCIARIAS**, identificado comercialmente con Nit. 901.240.955 -6, **R/L ARIEL NARVAEZ DELGADO**, identificado con cedula No 12.745.251, **JESUS FRANCO YELA RODRIGUEZ**, con cedula de ciudadanía No 5.342.351, **CONSTRUCCIONES y OBRAS DE INGENIERIA ALFA Y OMEGA SAS**, Nit 900.951.327-8, **R/L JAIME ANDRÉS CARMONA SUAREZ**, identificado con cedula de ciudadanía No 14.465.639, **CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA FENIX SAS**, Nit 900.825.192-1, **R/L JOHANA ANDREA POSADA PRIETO**, identificada con cedula No 38.561.793, **ARIEL NARVAEZ DELGADO**, identificado con cedula No 12.745.251, **HERNAN NARVAEZ DELGADO**, identificado con cedula de ciudadanía No 15.817.380, **JMY CONSTRUCCIONES SAS.**, Nit 901.122.127-9, **R/L MONICA ALEXANDRA YELA GETIAL**, identificada con cedula No 1.085.309.764 y **Sys PETROL SAS**, Nit 900.703.357-6 **R/L LUIS ALFREDO MUÑOZ BECERRA**, identificado con cedula de ciudadanía No 1.124.313.123, por la suma de **CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA**



Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (\$ 5.247'963.388.,45), por concepto de anticipo no ejecutado en el contrato 1225 de 2018.

Documentos que conforman el título ejecutivo complejo.

- Contrato No 1225 del 20 de diciembre de 2028
- Póliza No NB 100100416 y anexos 1-9
- Resolución No 021 del 21/04/23, por medio del cual se declara el siniestro con cargo al amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo....
- Resolución No 022 del 12/05/23, por medio se resuelve un recurso
- Notificaciones de los actos administrativos
- Rut
- Resolución que autoriza la modificación de miembros del consorcio
- Resolución que autoriza la modificación del representante legal del consorcio
- Constancia de ejecutoria

Que, de conformidad con los artículos, s 4.1 y 4.1 del decreto 0325 del 26 de diciembre de 2017, en concordancia con los artículos 469 del C.G.P., 829 de E.T y artículo 87 del C.P.A.C.A., los actos administrativos citados anteriormente, se encuentra debidamente ejecutoriado y por consiguiente presta merito ejecutivo por jurisdicción coactiva.

En cobro coactivo dentro del proceso en mención se adelantaron los siguientes actos administrativos.

1° Resolución No 059 del 24 de junio de 2024, por medio de la cual se libra mandamiento de pago y ordena medida preventiva. (Anexo resolución en mención)

2° Resolución No 077 del 9 de agosto de 2024, por medio del cual resuelve excepciones presentadas contra el mandamiento de pago. (Anexo resolución en mención)

3° Oficio No 1510 del 12 de agosto de 2024, por medio del cual se da respuesta a la petición impetrada por el señor Jaime Andrés Carmona Suarez en calidad de R/L de CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA ALFA Y OMEGA SAS. (Anexo oficio en mención con su respectiva notificación)

4° Oficio No 1511 del 12 de agosto de 2024, por medio del cual se da respuesta a la petición impetrada por la señora Johanna Andrea Posada Prieto en calidad de R/L de CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA FENIX SAS. (Anexo oficio en mención con su respectiva notificación).



5° Respuesta a recurso de reposición en subsidio el de apelación propuesto por JOHANA ANDREA POSADA PRIETO Y JAIME ANDRES CARMONA SUAREZ, se da respuesta teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Que de acuerdo a lo preceptuado por la ley 1066 de 2006 el procedimiento administrativo coactivo se encuentra regulado por el artículo 823 y siguientes del estatuto tributario, por el código general del proceso y por el código contencioso administrativo, cuando se presenten vacíos en la norma debe remitirse al Código general del proceso o al C.P.A.C.A

Que, dentro del proceso administrativo de cobro coactivo, contra el mandamiento de pago únicamente podrán presentarse excepciones las establecidas en el artículo 831 del E.T.

En el presente caso, no es viable conceder el recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra el mandamiento de pago, conforme lo estipula el artículo 833 – 1 del E.T., las decisiones que se tomen dentro del proceso administrativo de cobro son de trámite, lo que se traduce a que son preparatorias de ejecución o definitivas, conllevando a que las mismas no sean susceptibles de ser recurridas **con excepciones a la resolución que resuelve o falla las excepciones propuestas en contra del mandamiento de pago, la que ordena seguir adelante con la ejecución y remate de bienes embargados y secuestrados**, por estar expresamente señalado de dicha manera en el artículo 834 del Estatuto tributario el cual reza "(...) **contra el acto que resuelve de forma negativa las excepciones interpuestas contra el mandamiento de pago, inicialmente procede recurso de reposición, bajo las reglas excepcionales que rigen el Estatuto Tributario y no debe confundirse con el recurso de reposición empleado en el código contencioso administrativo por lo tanto carece de recurso de apelación (...)**" (subrayado fuera del texto original)

Respecto a sus inconformidades me permito hacerle las siguientes aclaraciones:

A la primera inconformidad, de ordenar medida cautelar: Conforme a la ley 80 de 1.993 y la sentencia C949 de 2001 de la Corte Constitucional, en la cual hace referencia a los Consorcios y el principio de la autonomía de la voluntad Atendiendo a la autonomía de la voluntad privada establecida esta como la facultad reconocida por el ordenamiento positivo a las personas para suponer de sus intereses con efecto vinculante, y por tanto para para crear derechos y obligaciones con los límites generales del orden público y las buenas costumbres, para el caso concreto la inclusión de nuevos miembros al consorcio vías terciarias se realizó basado en el principio de la autonomía de la voluntad de los consorciados que concurrieron inicialmente a presentar propuesta dentro del proceso de licitación pública detonante del contrato 1225 de 2018 y que suscribieron el contrato y empezaron a ejecutarlo; así mismo lo fue la voluntad de JAIME ANDRES CARMONA SUAREZ Y JOHANA ANDREA POSADA PRIETO, como personas naturales y representantes legales de CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA ALFA Y OMEGA SAS. Y CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA FENIX SAS., y es precisamente que a partir de que quedó perfeccionada la inclusión de los nuevos miembros al Consorcio vías



terciarias es que estos fueron objeto de derechos y obligaciones que no fueron necesariamente las que se generaron a partir de ese momento hacia futuro, sino que también asumieron las que el Consorcio Vías Terciarias como único contratista de obra tuvo a partir del momento de la legalización y perfeccionamiento del contrato desde y hacia la entidad contratante, dicho en otras palabras, la inclusión de nuevos miembros dada la solidaridad que se predica del contrato, es que no se puede escindir un antes de la inclusión de los miembros y un después de la misma, en razón a que cuando los otros nuevos miembros tomaron la decisión libre y espontánea de entrar a integrar el Consorcio Vías Terciarias en el ejercicio de la autonomía de la voluntad, lo hicieron en consideración a su carácter de contratistas del Estado –el Consorcio, y por ende, a participar no solamente de las utilidades que se derivarían de la ejecución del negocio jurídico, sino también para ser sujetos de obligaciones de dar hacer o de no hacer a las que el Consorcio se comprometió inicialmente, sin importar si los nuevos miembros participaron o no de la ejecución del anticipo, pues el contrato es uno solo el contratista lo es también, pues más allá de su composición siempre ha sido el Consorcio Vías Terciarias.

La misma ley establece la "Responsabilidad del Consorcio: En Colombia, los consorcios se constituyen como una figura en la que varias entidades se agrupan para llevar a cabo un proyecto específico. En principio, los miembros del consorcio responden solidariamente por el cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas ante el contratante.

1. **Responsabilidad del Representante Legal:** En cuanto a la responsabilidad del representante legal, el Código Civil y la Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratación de la Administración Pública) establecen que el representante legal de una entidad está vinculado a la obligación de actuar en el mejor interés de la entidad y cumplir con las obligaciones contractuales.
2. **Normativa Aplicable:** La Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 regulan aspectos relacionados con los contratos estatales y consorcios.
3. **Incumplimiento:** Si hay evidencia de que el representante legal actuó con dolo, negligencia grave, o fuera del ámbito de sus competencias, puede ser posible que se le atribuya responsabilidad directa."

En este mismo sentido el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha en Auto del 4 de julio de 2019, Sala de Decisión Civil señala:

(...) "Así las cosas, tenemos que el consorcio no es una persona jurídica, que no goza de patrimonio propio, sino de la suma de un esfuerzo común para lograr un objetivo común y concreto, conservando independencia patrimonial respecto de cada uno de los integrantes, el cual se manifiesta bajo el vínculo contractual y no societario; sin perjuicio de lo anterior debe cumplir con unas condiciones formales, tributarias y legales, que le exigen nombrar un "administrador" el cual lejos de un representante legal, es quien debe encargarse del cumplimiento del objeto social, cumplimiento de obligaciones de los contratantes, de tal suerte que el consorcio convierte en solidarios a los



contratantes de las obligaciones contraídas dentro del periodo de vigencia del contrato frente a terceros." (...) subraya y negrita fuera de texto.

Como vemos que el contratista Consorcio Vías Terciarias, en la cual ustedes hacen parte de su conformación, actuó de manera dolosa en el entendido que no dio buen manejo al anticipo entregado por el Departamento del Putumayo, Al respecto el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION CUARTA Consejero ponente (E): MARTHA TERESA BRICEÑO DE VALENCIA Bogotá, D.C., en sentencia del veintinueve (29) de abril de dos mil diez (2010) con Radicación número: 25000-23-27-000-2003-02200 01(16883) ha manifestado que: Los CONSORCIO Y UNIONES TEMPORALES – Formas de asumir riesgos / SOLIDARIDAD – Los miembros del consorcio y de la unión temporal responden por las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato / UNION TEMPORAL Y CONSORCIOS – No son personas jurídicas / CONTRATOS DE COLABORACION O DE AGRUPACION – Lo son los celebrados por las uniones temporales o los consorcios / UNION TEMPORAL – Las sanciones se imponen según el grado de participación de cada miembro Las uniones temporales, al igual que los consorcios, son formas de compartir riesgos entre personas naturales o jurídicas, que tienen capacidad para contratar con las entidades públicas (artículo 6 de la Ley 80 de 1993). Las dos figuras para la presentación de propuestas para la adjudicación, celebración y ejecución de contratos están definidas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. Así pues, tanto los miembros del consorcio como los de la unión temporal responden solidariamente por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. No obstante, en la unión temporal, las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones en mención deben imponerse según el grado de participación de cada miembro en la ejecución de estas, mientras que los integrantes de los consorcios responden solidariamente frente a las sanciones. Además, el consorcio y la unión temporal no son personas jurídicas sino la unión de personas para presentar una propuesta y celebrar y ejecutar un contrato con una entidad pública. Por ello, los acuerdos consorciales y de unión temporal han sido denominados contratos de colaboración o de agrupación. Y, tienen una duración limitada en el tiempo, pues, se repite, se crean solo para la presentación de una propuesta y, si resultan favorecidos, para la adjudicación, celebración y ejecución del contrato correspondiente.

Por lo expuesto se puede determinar que si es posible ordenar medida cautelar de embargo contra JAIME ANDRES CARMONA SUAREZ Y JOHANA ANDREA POSADA PRIETO, como personas naturales y representantes legales de CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA ALFA Y OMEGA SAS. Y CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA FENIX SAS., por cuanto firmas que ustedes representan hacen parte del Consorcio Vías Terciarias, bajo el entendido de que son estos quienes deben encargarse del cumplimiento del objeto social de las obligaciones contractuales.

Como vemos que los recurrentes son representantes legales de dos firmas que conforman el Consorcio Vías Terciarias, estos adquieren responsabilidades originadas por el incumplimiento del contrato, en este caso por el mal manejo del anticipo lo que



conlleva a ordenar el embargo preventivo de los bienes en que sea titular los deudores.

Sobre la finalidad de las medidas cautelares, la Corte en Sentencia C-379/04 se pronunció respecto a que: las medidas cautelares, son aquellos instrumentos con los cuales el ordenamiento protege, de manera provisional, y mientras dura el proceso, la integridad de un derecho que es controvertido en ese mismo proceso. De esa manera el ordenamiento protege preventivamente a quien acude a las autoridades judiciales a reclamar un derecho, con el fin de garantizar que la decisión adoptada sea materialmente ejecutada. Por ello, esta Corporación señaló, en casos anteriores, que estas medidas buscan asegurar el cumplimiento de la decisión que se adopte, porque los fallos serían ilusorios si la ley no estableciera mecanismos para asegurar sus resultados, impidiendo la destrucción o afectación del derecho controvertido. Así mismo sostiene la Corte "Las medidas cautelares tienen amplio sustento constitucional, puesto que desarrollan el principio de eficacia de la administración de justicia, son un elemento integrante del derecho de todas las personas a acceder a la administración de justicia y contribuyen a la igualdad procesal. Sin embargo, la Corte ha afirmado que "aunque el Legislador, goza de una considerable libertad para regular el tipo de instrumentos cautelares y su procedimiento de adopción, debe de todos modos obrar cuidadosamente, por cuanto estas medidas, por su propia naturaleza, se imponen a una persona antes de que ella sea vencida en juicio. Por ende, ... los instrumentos cautelares, por su naturaleza preventiva, pueden llegar a afectar el derecho de defensa y el debido proceso, en la medida en que restringen un derecho de una persona, antes de que ella sea condenada en un juicio.

A la segunda inconformidad, Inexistencia de relación contractual ausencia de nexo causal: Según la legislación colombiana, los integrantes de un consorcio pueden tener un nexo causal con la responsabilidad por incumplimiento de un contrato en caso de mal manejo del anticipo. Los consorcios son considerados como una entidad jurídica que permite a sus miembros actuar en conjunto, lo que implica que los compromisos asumidos por el consorcio son responsabilidad de todos sus integrantes, en este caso existe un mal manejo del anticipo este causa daños y perjuicios al Departamento del Putumayo, por lo que los miembros del consorcio son considerados solidariamente responsables. Esto significa que cualquier miembro puede ser demandado por el total del daño, aunque la responsabilidad interna entre ellos se puede regular por los acuerdos internos del consorcio. Por lo tanto, es fundamental que los consorciados establezcan claramente sus roles y responsabilidades en el contrato de consorcio para evitar conflictos en caso de incumplimiento.

la responsabilidad de los integrantes de un consorcio en relación con el incumplimiento de un contrato, incluido el mal manejo del anticipo, se puede fundamentar en varias normas y principios legales.

1. **Código Civil:** Establece que las obligaciones pueden ser solidarias. Según el artículo 2344, en un contrato donde hay solidaridad, todos los deudores pueden ser obligados a cumplir la totalidad de la deuda.



2. **Ley 80 de 1993:** Esta ley regula la contratación estatal en Colombia y menciona que los consorcios son responsables de manera conjunta e indivisible por las obligaciones derivadas del contrato. Específicamente, el artículo 27 establece que los miembros del consorcio son solidariamente responsables frente a la entidad contratante.
3. **Jurisprudencia:** La Corte Constitucional y el Consejo de Estado han abordado la responsabilidad de los consorcios y su naturaleza solidaria en diversas sentencias, reafirmando que los miembros del consorcio comparten la responsabilidad por el cumplimiento de las obligaciones contractuales, como por ejemplo la sentencia del Consejo de Estado antes mencionada

A la tercera inconformidad: Resolución de contenido equivoco: Como ya se explicó en la respuesta de la primera inconsistencia de conformidad a los principios y demás artículos de la ley 80 y la jurisprudencia citada anteriormente, se puede concluir que los señores JAIME ANDRES CARMONA SUAREZ Y JOHANA ANDREA POSADA PRIETO, en calidad de representantes legales de CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA ALFA Y OMEGA SAS. Y CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA FENIX SAS., por hacer parte de la conformación del Consorcio Vías Terciarias, único contratista, son también responsables de las obligaciones que se desprenden del incumplimiento del contrato en este caso del mal manejo del anticipo.

Con base al título complejo en firme y ejecutoriado, donde se avizora que los concurrentes son obligados a responder por la obligación, la funcionaria ejecutora da inicio al cobro coactivo expidiendo acto administrativo que ordena librar mandamiento de pago y decretar medida cautelar preventiva.

Por lo que los argumentos utilizados en la expedición del mandamiento de pago, expedido por la funcionaria ejecutora no se hace de manera caprichosa, si no en cumplimiento a la normatividad y jurisprudencia citada a lo largo de este acto administrativo y sobre todo garantizando los derechos a los ejecutados como el debido proceso, de contradicción y defensa. Así mismo el Departamento del Putumayo en calidad de contratante, busca recuperar los dineros entregados al contratista en calidad de anticipo, con el fin de dar cumplimiento a los fines Estatales. La ley 80 de 1.993 en su artículo 3 establece manifiesta que Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines, así mismo el artículo 4 de la citada ley establece que para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales: 1o. Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Iguales exigencias podrán hacer al garante. 2o. Adelantarán las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. 3o. Solicitarán las actualizaciones o la revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos que alteren en su contra el equilibrio económico o financiero del contrato. 4o. Adelantarán revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o



bienes suministrados, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, y promoverán las acciones de responsabilidad contra éstos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan.

A la cuarta inconformidad, Inexistencia de título: Teniendo en cuenta que el título que se pretende ejecutar es complejo, porque se encuentra conformado por varios documentos que constituyen una unidad jurídica, por lo que se debe analizar en conjunto todos los documentos que lo integran para librar o no el mandamiento de pago.

En el caso que nos ocupa, el título ejecutivo complejo se conforma de los siguientes actos administrativos:

1° Contrato No 1225 del 28 de diciembre de 2018

2° Póliza de seguros No NB100100416, que garantiza el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato 1225 del 28 de diciembre de 2018 en las siguientes situaciones: la no inversión del anticipo, el uso indebido del anticipo y la apropiación indebida de los recursos recibidos en calidad de anticipo.

3° Resolución No 021 de 2023 que declara el siniestro con cargo al buen manejo y correcta inversión del anticipo, acto administrativo notificado a los ejecutados.

4° Resolución No 022 de 2023 por medio de la cual se resuelve los recursos de reposición en contra de la resolución No 021 de 2023.

5° Constancia de ejecutoria

El título en mención, cumple con los requisitos asignado en el artículo 422 del Código General del Proceso, es claro expreso y exigible, al respecto la sentencia STC720-2021 la Corte a adoctrinado: "(...) Los requisitos impuestos a los títulos ejecutivos, consignados en el artículo 422 del Código General del Proceso, relativos a tratarse de un documento proveniente del deudor o de su causante en donde conste una obligación clara, expresa y exigible; por supuesto se trasladan a los títulos valores y, en esa medida, si el instrumento no satisface tales presupuestos, no puede seguir adelante el cobro coercitivo (...)".

"(...) La claridad de la obligación, consiste en que el documento que la contenga sea inteligible, inequívoco y sin confusión en el contenido y alcance obligacional de manera que no sea oscuro

con relación al crédito a favor del acreedor y la deuda respecto del deudor. Que los elementos de la obligación, sustancialmente se encuentren presentes: Los sujetos, el objeto y el vínculo jurídico. Tanto el préstamo a favor del sujeto activo, así como la acreencia en contra y a cargo del sujeto pasivo (...)".

"(...) La expresividad, como característica adicional, significa que la obligación debe ser explícita, no implícita ni presunta, salvo en la confesión presunta de las preguntas asertivas. No se trata de que no haya necesidad de realizar argumentaciones densas o rebuscadas para hallar la obligación, por cuanto lo meramente indicativo o implícito o tácito al repugnar con lo expreso no puede ser exigido ejecutivamente.



Tampoco de suposiciones o de formulación de teorías o hipótesis para hallar el título. Y es exigible en cuanto la obligación es pura y simple o de plazo vencido o de condición cumplida (...)"

En el asunto que nos ocupa, el título se encuentra en firme y ejecutoriado en vía gubernativa, de acuerdo al artículo 87 del CPACA, los actos administrativos quedan ejecutoriados en los siguientes casos:

1° Cuando contra ellos no proceda ningún recurso: Si el acto administrativo no admite ningún recurso, queda ejecutoriado desde el momento de su notificación, publicación o comunicación, según corresponda.

2° Cuando se hayan decidido todos los recursos interpuestos: Si se han presentado recursos en contra del acto administrativo (como el recurso de reposición o el de apelación) y éstos han sido resueltos por la administración, el acto queda ejecutoriado una vez se notifique la decisión que resuelve el último de los recursos interpuestos.

3° Cuando haya vencido el término para interponer recursos sin que estos se hayan presentado: Si el término para interponer recursos en contra del acto administrativo ha expirado y no se ha presentado ningún recurso, el acto queda ejecutoriado al finalizar dicho plazo.

Por otra parte, el artículo 91 del CPACA, establece: Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Así, las cosas, no es este el momento de cuestionar la legalidad de los actos administrativos que conforman el título ejecutivo complejo, pues bien se notificó en su debido tiempo, dándole oportunidad a los ejecutados para que haga uso de los recursos establecidos por la ley y así garantizarle el debido proceso y de contradicción, el título ejecutivo quedó en firme y ejecutoriado, de tal manera que esta no es la oportunidad para alegar nada previo a la firmeza del título que se pretende ejecutar. Ahora bien, en la etapa de cobro coactivo no deben debatirse situaciones que debieron ser debatidas en vía gubernativa, lo que le impide a este despacho pronunciarse sobre cuestiones de fondo sobre la constitución de la obligación como tal.

Al respecto la Corte Constitucional en **Sentencia C-224/13** ha manifestado: la naturaleza del cobro coactivo ha sido ampliamente discutida, hasta el punto de que no existe al momento una tesis dominante en la comunidad jurídica. En esta Corporación, por ejemplo, ha prevalecido la tesis de que su ejercicio envuelve la realización de actividades administrativa, por cuanto no están encaminadas a la definición y resolución definitiva de controversias, sino únicamente a la ejecución y materialización de los actos de la propia administración pública.

Así mismo el Consejo de Estado en **Sentencia T-396/05**, reconoce en su jurisprudencia al advertir que "el juez de la ejecución no lo es de la validez del acto cuyo cumplimiento se trata, la cual se discute por el administrativo a través de los recursos



procedentes contra él en la vía gubernativa y si agotada ésta subsiste la controversia, mediante la acción tendiente a que se anulen o modifiquen. Es la correcta aplicación de la ley sustancial, siguiendo el procedimiento debido, la que constituye objeto de tales recursos gubernativos. Y a ello se refiere el inciso 2°. del artículo 561 del C. de P. C., cuando impide debatir en el proceso de jurisdicción coactiva cuestiones que debieron alegarse en la instancia de impugnación gubernativa.

De lo anterior expuesto, no es viable conceder el recurso de reposición y en subsidio el de apelación instaurado contra resolución No 059 del 24 de junio de 2024 y los actos administrativos oficios TGD- 1510 y TGD 1511 del 12 de agosto del 2024, expedidos dentro del proceso 2024-007, de conformidad con el artículo 833 – 1 del E.T.

Así las cosas, el Departamento del Putumayo como Entidad ejecutora, ordenará seguirá adelante con las actuaciones del proceso por jurisdicción coactiva.

En mérito de lo expuesto, la Tesorera General del Departamento del Putumayo, en calidad de funcionaria ejecutora de los procesos que se adelantan por vía coactiva a favor del Departamento del Putumayo, **RESUELVE- PRIMERO: NEGAR** el recurso de reposición en subsidio el de apelación interpuesto por JAIME ANDRES CARMONA SUAREZ Y JOHANA ANDREA POSADA PRIETO, contra el mandamiento de pago resolución No 059 del 24 de junio de 2024 y los actos administrativos oficios TGD- 1510 y TGD 1511 del 12 de agosto del 2024, expedidos dentro del proceso 2024-007, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. **SEGUNDO: ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN**, del proceso N° 2024-007, adelantados contra la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. con Nit. 860.037.013 6, CONSORCIO VIAS TERCARIAS con Nit. 901.240.955 6 y OTROS **TERCERO: NOTIFICAR**, el contenido de la presente resolución a los señores JAIME ANDRES CARMONA SUAREZ Y JOHANA ANDREA POSADA PRIETO, en calidad de representantes legales de CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA ALFA Y OMEGA SAS. Y CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA FENIX SAS., o a su apoderado conforme lo establece el artículo 565 del E.T., modificado por el artículo 45 de la ley 1111 de 2006 y 569 de E.T., advirtiéndole que contra la presente no procede recurso alguno, de conformidad con el artículo 833 – 1 del Estatuto Tributario.

6° Respuesta a peticiones repetitivas 20241106-E-006793, se da respuesta en los siguientes términos:

En atención a la solicitud presentada por JAIME ANDRES CARMONA SUAREZ Y JOHANA ANDREA POSADA PRIETO como R/L DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA ALFA Y OMEGA S.A.S. y CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA FENIX S.A.S, respetuosamente y dentro del término legal contemplado en la Ley 1755 del 30 de junio de 2015, con el presente me permito dar respuesta de fondo a su solicitud en los siguientes términos:



Me permito recordarles que sus inconformidades referidas a no ser responsables de la obligación contenida en el título ejecutivo enviado por la oficina de contratación respecto al incumplimiento del contrato 1225 de 2018 por mal manejo en el anticipo fueron resueltas en la respuesta del recurso de reposición, no obstante sustraigo aportes importantes para esta ilustración así: "Conforme a la ley 80 de 1.993 y la sentencia C949 de 2001 de la Corte Constitucional, en la cual hace referencia a los Consorcios y el principio de la autonomía de la voluntad, entendida para el caso, como la autonomía de la voluntad privada, establecida como la facultad reconocida por el ordenamiento positivo a las personas para suponer de sus intereses con efecto vinculante, y por tanto para para crear derechos y obligaciones con los límites generales del orden público y las buenas costumbres, para el caso concreto la inclusión de nuevos miembros al consorcio vías terciarias se realizó basado en el principio de la autonomía de la voluntad de los consorciados que concurren inicialmente a presentar propuesta dentro del proceso de licitación pública detonante del contrato 1225 de 2018 y que suscribieron el contrato y empezaron a ejecutarlo; asumiendo obligaciones, responsabilidades y derechos, así mismo lo fue la voluntad de JAIME ANDRES CARMONA SUAREZ Y JOHANA ANDREA POSADA PRIETO, como personas naturales y representantes legales de CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA ALFA Y OMEGA SAS. Y CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA FENIX SAS., y es precisamente que a partir de que quedó perfeccionada la inclusión de los nuevos miembros al Consorcio vías terciarias es que estos fueron objeto de derechos y obligaciones que no fueron necesariamente las que se generaron a partir de ese momento hacia futuro, sino que también asumieron las que el Consorcio Vías Terciarias como único contratista de obra tuvo a partir del momento de la legalización y perfeccionamiento del contrato desde y hacia la entidad contratante, dicho en otras palabras, la inclusión de nuevos miembros dada la solidaridad que se predica del contrato, es que no se puede escindir un antes de la inclusión de los miembros y un después de la misma, en razón a que cuando los otros nuevos miembros tomaron la decisión libre y espontánea de entrar a integrar el Consorcio Vías Terciarias en el ejercicio de la autonomía de la voluntad, lo hicieron en consideración a su carácter de contratistas del Estado –el Consorcio, y por ende, a participar no solamente de las utilidades que se derivarían de la ejecución del negocio jurídico, sino también para ser sujetos de obligaciones de dar hacer o de no hacer a las que el Consorcio se comprometió inicialmente, sin importar si los nuevos miembros participaron o no de la ejecución del anticipo, pues el contrato es uno solo el contratista lo es también, pues más allá de su composición siempre ha sido el Consorcio Vías Terciarias. **La misma ley establece que los consorcios se constituyen como una figura en la que varias entidades se agrupan para llevar a cabo un proyecto específico. En principio, los miembros del**



consorcio responden solidariamente por el cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas ante el contratante.

En este mismo sentido el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha en Auto del 4 de julio de 2019, Sala de Decisión Civil señala: (...) "Así las cosas, tenemos que el consorcio no es una persona jurídica, que no goza de patrimonio propio, sino de la suma de un esfuerzo común para lograr un objetivo común y concreto, conservando independencia patrimonial respecto de cada uno de los integrantes, el cual se manifiesta bajo el vínculo contractual y no societario; sin perjuicio **de lo anterior debe cumplir con unas condiciones formales, tributarias y legales, que le exigen nombrar un "administrador" el cual lejos de un representante legal, es quien debe encargarse del cumplimiento del objeto social, cumplimiento de obligaciones de los contratantes, de tal suerte que el consorcio convierte en solidarios a los contratantes de las obligaciones contraídas dentro del periodo de vigencia del contrato frente a terceros.**" (...) subraya y negrita fuera de texto.

La Jurisprudencia señala que los CONTRATOS DE COLABORACIÓN O DE AGRUPACIÓN – Lo son los celebrados por las uniones temporales o los consorcios / UNIÓN TEMPORAL – Las sanciones se imponen según el grado de participación de cada miembro Las uniones temporales, al igual que los consorcios, son formas de compartir riesgos entre personas naturales o jurídicas, que tienen capacidad para contratar con las entidades públicas (artículo 6 de la Ley 80 de 1993). Las dos figuras para la presentación de propuestas para la adjudicación, celebración y ejecución de contratos están definidas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. Así pues, tanto los miembros del consorcio como los de la unión temporal responden solidariamente por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. No obstante, en la unión temporal, las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones en mención deben imponerse según el grado de participación de cada miembro en la ejecución de estas, mientras que los integrantes de los consorcios responden solidariamente frente a las sanciones. Además, el consorcio y la unión temporal no son personas jurídicas sino la unión de personas para presentar una propuesta y celebrar y ejecutar un contrato con una entidad pública. Por ello, los acuerdos consorciales y de unión temporal han sido denominados contratos de colaboración o de agrupación. Y, tienen una duración limitada en el tiempo, pues, se repite, se crean solo para la presentación de una propuesta y, si resultan favorecidos, para la adjudicación, celebración y ejecución del contrato correspondiente.

Por lo antes expuesto, vemos que los señores JAIME ANDRES CARMONA SUAREZ Y JOHANA ANDREA POSADA PRIETO, como representantes legales de las firmas CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA ALFA Y OMEGA SAS. Y CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA FENIX SAS., partícipes del Consorcio Vías Terciarias, los mismos adquieren obligaciones y responsabilidades originadas por el incumplimiento del contrato, en este caso por el mal manejo del anticipo lo que conllevó a ordenar el embargo preventivo de los bienes en que sea titular los deudores.

Por otra parte, me permito informarle que mediante acta la Administración Departamental aprobó la póliza de seguros judiciales No 02-41-101000364, en donde la Compañía Mundial de Seguros, aseguro el saldo de la obligación contenida en el proceso No 2024-007, la suma de 4.893.197.303, con vigencia por el término que dure el proceso en todas sus instancias.

Por lo antes expuesto, es procedente ordenar el levantamiento de la medida cautelar en su contra, pero el proceso seguirá activo, hasta tanto exista pronunciamiento del juez competente donde ordene el archivo del proceso o la exoneración de responsabilidad en su contra.

2. PRESUPUESTOS PROCESALES DE LA ACCIÓN DE TUTELA. REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA.

Con la finalidad de proteger los derechos fundamentales establecidos en nuestra Constitución, la acción de tutela logra tal cometido al configurarse como el mecanismo idóneo y eficaz para esta clase de asuntos. Es así como lo establece la Norma Superior en su artículo 86, al señalar lo siguiente:

"Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública. (...) La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión.

Como cuestión previa, al abordar el asunto de la procedencia de las acciones acumuladas, esto es, determinar si se dan las circunstancias generales que tienen que estar presentes para que el juez constitucional pueda entrar a estudiar y decidir una acción de tutela, en cuanto se cumplan sus presupuestos procesales.

3.1 El primer presupuesto procesal de la acción de tutela exige que haya sido interpuesta para la **defensa de un derecho fundamental**.



Los Tutelantes exponen en su acción de la tutela que les han violado el derecho fundamental, del Debido Proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional

En el presente caso, el Departamento del Putumayo, no ha vulnerado el derecho fundamental invocado, puesto que ninguna de las actuaciones y gestiones de esta administración departamental, tiene el alcance, la injerencia para vulnerar el Debido Proceso tal y como se puede apreciar con los anexos de este informe tutelar y los anexos presentados con la respectiva acción de Tutela.

3.2. El segundo presupuesto procesal de la acción de tutela se refiere a la existencia de **legitimación en la causa por activa**, es decir, que el derecho fundamental para cuya protección se interpone sea propio del demandante o se halle dentro de las posibilidades de acción por otro normativamente admitidas.

En este caso se verifica, que efectivamente los tutelantes están facultados para interponer este tipo de acciones.

3.3 El tercer presupuesto procesal de la acción de tutela es la **legitimación en la causa por pasiva**, exigencia que implica que contra quien se interpone la acción sea la autoridad o el particular que vulneró o amenaza vulnerar el derecho fundamental.

En el presente caso, el Departamento del Putumayo, no está legitimado en la causa por pasiva, para atender las pretensiones que irrogan los tutelantes, en el entendido que se ha respetado el Debido Proceso en todas las actuaciones que se han adelantado hasta la fecha.

3.4 En torno a la inmediatez en el ejercicio de la acción de tutela, el presunto agravio a los derechos fundamentales.

Respecto este principio la Honorable Corte Constitucional, en abundante jurisprudencia ha señalado unas reglas y lineamientos del orden jurisprudencial, en ese sentido mediante fallo de tutela T-246/15, señaló lo siguiente:

"La inmediatez es un principio orientado a la protección de la seguridad jurídica y los intereses de terceros, y no una regla o término de caducidad, posibilidad opuesta a la literalidad del artículo 86 de la Constitución. La satisfacción del



requisito debe analizarse bajo el concepto de plazo razonable y en atención a las circunstancias de cada caso concreto. Esa razonabilidad se relaciona con la finalidad de la acción, que supone a su vez la protección urgente e inmediata de un derecho constitucional fundamental.

Al trasladar los anteriores presupuestos jurisprudenciales al caso concreto, se evidencia en que no han trascurrido más de seis meses, entre la interposición de las peticiones y la presentación de la presente acción constitucional.

3.5. En cuanto al quinto presupuesto procesal que debe verificar la Sala para determinar la procedencia de la acción de tutela, esto es, la inexistencia de otro medio idóneo de defensa judicial, debe considerarse que haber incurrido dentro de actuaciones administrativas en el desconocimiento del diligenciamiento y/o de los requisitos previamente establecidos, quebrantando con ello el derecho al debido proceso administrativo y eventualmente otros derechos fundamentales, no hace procedente per se la acción de tutela, en cuanto el inciso tercero del artículo 86 superior estatuye que "esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable" (La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, Sentencia de Tutela T-241/08)

En este caso, es claro que procedimiento que se viene adelantando se ha respetado el debido proceso, contestando oportunamente todas las inconformidades presentadas por los tutelantes y a la fecha se encuentra pendiente la Revocatoria de dos oficios tal y como se ha expresado al inicio de este informe de Tutela.

IV. CONSIDERACIONES JURISPRUDENCIALES RESPECTO LA FALTA DE LEGITIMACIÓN POR PASIVA RESPECTO DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación Constitucional, en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:



"La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. Por tanto, cuando una de las partes carece de dicha calidad o atributo, no puede el juez adoptar una decisión de mérito y debe entonces simplemente declararse inhibido para fallar el caso de fondo.

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material. Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquella, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto. Más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño." (Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, Sentencia T-1001/06)

PETICIÓN

Con base en lo anterior solicito declarar la improcedencia de la Acción de Tutela en el entendido que la Administración Departamental ha respetado el Debido Proceso, de acuerdo a las pruebas obrantes en la Acción de tutela y a la fecha se



ordenó el levantamiento de la medida cautelar en contra de los tutelantes, en el entendido que la empresa aseguradora garantizó el pago de los intereses causados con el incumplimiento del contrato y mal manejo del anticipo del contrato.

PRUEBAS Y ANEXOS

- 1° Respuesta a recurso de reposición en subsidio el de apelación
- 2° Respuesta a peticiones repetitivas 20241106-E-006793
- 3° Oficios enviados a los bancos ordenando el levantamiento de la medida cautelar

NOTIFICACIONES

Recibiré notificación en la Calle 8 Nro. 7-40, 3er piso, Nuevo Edificio Palacio Departamental; o vía e-mail notificaciones.judiciales@putumayo.gov.co

Del señor Juez,



ANDRÉS PABLO DE JESÚS RODRÍGUEZ SOSA
Jefe Oficina Jurídica
Departamento del Putumayo

Proyecto	Luis Guillermo Rosero Cuéllar	Oficina Jurídica Departamental	Profesional Especializado
----------	-------------------------------	--------------------------------	---------------------------



PROCESOS: 2024-007

DE: Departamento del Putumayo

CONTRA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. con Nit. 860.037.013 6, CONSORCIO VIAS TERCARIAS con Nit. 901.240.955 6 y OTROS

CONCEPTO: Anticipo no ejecutado cto. 1225 de 2018

Correo electrónico: jaimecarmona82@yahoo.com contabilidad@edificar.org hugosalazarpelaez@gmail.com

RESOLUCIÓN No 158
Del 17 de octubre del 2024

"POR MEDIO DE LA CUAL RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION Y EN SUBSIDIO EL DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN No 059 DEL 24 DE JUNIO DE 2024 y LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS OFICIOS TGD- 1510 Y TGD 1511 DEL 12 DE AGOSTO DEL 2024".

LA TESORERA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, En uso de las facultades conferidas por el Art. 5º de la Ley 1066 de 2006 y su Decreto Reglamentario 4473 de 2006, en especial por la Ordenanza 766 de 2018 y Decreto 325 de 2017, expedido por el Departamento del Putumayo, "Por el cual se adopta el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera" y teniendo en cuenta que,

ANTECEDENTES

Que la Oficina de Contratación del Departamento del Putumayo, allegó a esta Despacho para cobro coactivo, documentos que conforman título ejecutivo, entre ellos tenemos:

- 1º Copia contrato No 1225 de 2018
- 2º Póliza de seguros de cumplimiento No NB100100416, sus anexos y certificaciones
- 3º Orden de pago del anticipo Cto. 1225-2018
- 4º Registro único tributario Consorcio vías terciarias.
- 5º Resolución por la cual se autoriza la modificación de miembros del consorcio vías terciarias en el contrato No 1225 de 2018.
- 6º Resolución por medio de la cual se autoriza la modificación del representante legal del Consorcio Vías terciarias en el Cto 1225 de 2018.
- 7º Resolución No 189 de 2024 por medio del cual se ordena la liquidación unilateral de contrato de obra No 1225 de 2018.
- 8º Resolución No 021 de 2023 por medio de la cual se declara el siniestro con cargo de buen manejo y correcta inversión del anticipo otorgado mediante seguro de cumplimiento a favor de las entidades Estatales No NB 100100416 que garantiza el contrato de obra pública No 1225 de 2018.
- 9º Resolución No 022 de 2023 por medio de la cual se resuelve los recursos de reposición en contra de la resolución No 021 de 2023
- 10º Constancia de ejecutoria.

Que, una vez revisado los documentos allegados que conforman el título ejecutivo en cuestión, se logró determinar que los mismos se ajustan a derecho, lo que conlleva a que la suscrita Tesorera General del Departamento del Putumayo, competente para adelantar y ejecutar procesos por jurisdicción coactiva, de inicio al proceso administrativo de cobro coactivo 2024-007 a favor del



Departamento del Putumayo y contra la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. con Nit. 860.037.013 6, CONSORCIO VIAS TERCARIAS con Nit. 901.240.955 6 y OTROS, por concepto de clausula penal incumplimiento del contrato No 1225 de 2018

Que dentro del proceso de cobro coactivo 2024-007, el Departamento del Putumayo a expedido los siguientes actos administrativos:

Resolución No 059 del 24 de junio de 2024 por medio del cual resuelve LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO Y ORDENA MEDIDA PREVENTIVA, acto administrativo que fue notificado a los señores JOHANA ANDREA POSADA PRIETO Y JAIME ANDRES CARMONA SUAREZ el día 18 de septiembre de 2024.

Que los señores JOHANA ANDREA POSADA PRIETO Y JAIME ANDRES CARMONA SUAREZ por intermedio de su apoderado judicial presentaron recurso de reposición contra LA RESOLUCIÓN No 059 DEL 24 DE JUNIO DE 2024 por medio del cual se ordena librar mandamiento de pago y ordena medida preventiva y contra los actos administrativos oficios TGD-1510 y TGD 1511 del 12 de agosto del 2024 que niega eximir de responsabilidad a los antes mencionados en calidad de representantes legales.

EL RECURSO PROPUESTO

Que los días 12 y 23 de septiembre de 2024, Que los señores JOHANA ANDREA POSADA PRIETO Y JAIME ANDRES CARMONA SUAREZ por intermedio de su apoderado judicial presentaron recurso de reposición contra LA RESOLUCIÓN No 059 DEL 24 DE JUNIO DE 2024 por medio del cual se ordena librar mandamiento de pago y ordena medida preventiva y contra los actos administrativos oficios TGD- 1510 y TGD 1511 del 12 de agosto del 2024 que niega eximir de responsabilidad a los antes mencionados en calidad de representantes legales, petición que argumenta en los siguientes términos:

Imposibilidad de ordenar medida cautelar: Que el señor Jaime Andrés Carmona Suarez no es el representante legal del Consorcio Vías Terciarias por tanto no se puede extender esa causal excepcional frente a mi representado para perseguirlo coactivamente. Además, al margen la figura en cuestión solamente es aplicable si ese representante legal ha incurrido en dolo o culpa grave, situación que no se ha mencionado y mucho menos demostrado en la resolución y respuesta que se ataca...

Inexistencia de relación contractual ausencia de nexo causal: el señor Jaime Andrés Carmona Suarez como persona natural no tiene relación alguna con el Consorcio Vías Terciarias, según la composición del mismo mi representado no hace parte de ese consorcio ni es su empleado. Por lo tanto, no puede exigírsele responsabilidad ni mucho menos solidaridad con obligaciones respecto de las cuales no tiene ningún nexo.

Resolución de contenido equivoco: De la redacción de la resolución puede inferirse que ella se predica (para el caso concreto) de una presenta responsabilidad del asociado CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA ALFA Y OMEGA SAS....

Pero en aplicación contraria a la ley y a la jurisprudencia apartándose de la interpretación lógica y gramatical según las voces de los artículos 27 y ss. del C.C. violenta la ley y contradice la jurisprudencia y la doctrina extendiendo su contenido a estados no respaldados ni viables legalmente dándole un alcance totalmente censurable a su interpretación.

Inexistencia de título: El título que se pretende esgrimir no proviene del deudor JAIME ANDRES CARMONA SUAREZ, dado que no existe ninguna relación contractual y/o extracontractual de el con el Departamento del Putumayo que le permita legalmente la Tesorería General del Departamento incoar proceso coactivo en su contra y obviamente, decretar medida cautelar.

Como petición solicita: inmediata aclaración de sus providencias en el sentido de explicitar que tanto el mandamiento de pago como las medidas cautelares deprecadas no se refieren, ni cubren ni aplican respecto de JAIME ANDRES CARMONA SUAREZ.



CONSIDERACIONES

Que para resolver el recurso de reposición propuesto por JOHANA ANDREA POSADA PRIETO Y JAIME ANDRES CARMONA SUAREZ, se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones:

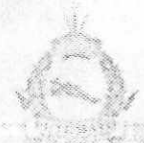
Que de acuerdo a lo preceptuado por la ley 1066 de 2006 el procedimiento administrativo coactivo se encuentra regulado por el artículo 823 y siguientes del estatuto tributario, por el código general del proceso y por el código contencioso administrativo, cuando se presenten vacíos en la norma debe remitirse al Código general del proceso o al C.P.A.C.A

Que, dentro del proceso administrativo de cobro coactivo, contra el mandamiento de pago únicamente podrán presentarse excepciones las establecidas en el artículo 831 del E.T.

En el presente caso, no es viable conceder el recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra el mandamiento de pago, conforme lo estipula el artículo 833 – 1 del E.T., las decisiones que se tomen dentro del proceso administrativo de cobro son de trámite, lo que se traduce a que son preparatorias de ejecución o definitivas, conllevando a que las mismas no sean susceptibles de ser recurridas con excepciones a la resolución que resuelve o falla las excepciones propuestas en contra del mandamiento de pago, la que ordena seguir adelante con la ejecución y remate de bienes embargados y secuestrados, por estar expresamente señalado de dicha manera en el artículo 834 del Estatuto tributario el cual reza "(...) contra el acto que resuelve de forma negativa las excepciones interpuestas contra el mandamiento de pago, inicialmente procede recurso de reposición, bajo las reglas excepcionales que rigen el Estatuto Tributario y no debe confundirse con el recurso de reposición empleado en el código contencioso administrativo por lo tanto carece de recurso de apelación (...)" (subrayado fuera del texto original)

Respecto a sus inconformidades me permito hacerle las siguientes aclaraciones:

A la primera inconformidad, de ordenar medida cautelar: Conforme a la ley 80 de 1.993 y la sentencia C949 de 2001 de la Corte Constitucional, en la cual hace referencia a los Consorcios y el principio de la autonomía de la voluntad Atendiendo a la autonomía de la voluntad privada establecida esta como la facultad reconocida por el ordenamiento positivo a las personas para suponer de sus intereses con efecto vinculante, y por tanto para para crear derechos y obligaciones con los límites generales del orden público y las buenas costumbres, para el caso concreto la inclusión de nuevos miembros al consorcio vías terciarias se realizó basado en el principio de la autonomía de la voluntad de los consorciados que concurrieron inicialmente a presentar propuesta dentro del proceso de licitación pública detonante del contrato 1225 de 2018 y que suscribieron el contrato y empezaron a ejecutarlo; así mismo lo fue la voluntad de JAIME ANDRES CARMONA SUAREZ Y JOHANA ANDREA POSADA PRIETO, como personas naturales y representantes legales de CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA ALFA Y OMEGA SAS. Y CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA FENIX SAS., y es precisamente que a partir de que quedó perfeccionada la inclusión de los nuevos miembros al Consorcio vías terciarias es que estos fueron objeto de derechos y obligaciones que no fueron necesariamente las que se generaron a partir de ese momento hacia futuro, sino que también asumieron las que el Consorcio Vías Terciarias como único contratista de obra tuvo a partir del momento de la legalización y perfeccionamiento del contrato desde y hacia la entidad contratante, dicho en otras palabras, la inclusión de nuevos miembros dada la solidaridad que se predica del contrato, es que no se



puede escindir un antes de la inclusión de los miembros y un después de la misma, en razón a que cuando los otros nuevos miembros tomaron la decisión libre y espontánea de entrar a integrar el Consorcio Vías Terciarias en el ejercicio de la autonomía de la voluntad, lo hicieron en consideración a su carácter de contratistas del Estado –el Consorcio, y por ende, a participar no solamente de las utilidades que se derivarían de la ejecución del negocio jurídico, sino también para ser sujetos de obligaciones de dar hacer o de no hacer a las que el Consorcio se comprometió inicialmente, sin importar si los nuevos miembros participaron o no de la ejecución del anticipo, pues el contrato es uno solo el contratista lo es también, pues más allá de su composición siempre ha sido el Consorcio Vías Terciarias.

La misma ley establece la **“Responsabilidad del Consorcio:** En Colombia, los consorcios se constituyen como una figura en la que varias entidades se agrupan para llevar a cabo un proyecto específico. En principio, los miembros del consorcio responden solidariamente por el cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas ante el contratante.

1. **Responsabilidad del Representante Legal:** En cuanto a la responsabilidad del representante legal, el Código Civil y la Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratación de la Administración Pública) establecen que el representante legal de una entidad está vinculado a la obligación de actuar en el mejor interés de la entidad y cumplir con las obligaciones contractuales.
2. **Normativa Aplicable:** La Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 regulan aspectos relacionados con los contratos estatales y consorcios
3. **Incumplimiento:** Si hay evidencia de que el representante legal actuó con dolo, negligencia grave, o fuera del ámbito de sus competencias, puede ser posible que se le atribuya responsabilidad directa.”

En este mismo sentido el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha en Auto del 4 de julio de 2019, Sala de Decisión Civil señala:

(...)“Así las cosas, tenemos que el consorcio no es una persona jurídica, que no goza de patrimonio propio, sino de la suma de un esfuerzo común para lograr un objetivo común y concreto, conservando independencia patrimonial respecto de cada uno de los integrantes, el cual se manifiesta bajo el vínculo contractual y no societario; sin perjuicio de lo anterior debe cumplir con unas condiciones formales, tributarias y legales, que le exigen nombrar un “administrador” el cual lejos de un representante legal, es quien debe encargarse del cumplimiento del objeto social, cumplimiento de obligaciones de los contratantes, de tal suerte que el consorcio convierte en solidarios a los contratantes de las obligaciones contraídas dentro del periodo de vigencia del contrato frente a terceros.”(…) subraya y negrita fuera de texto.

Como vemos que el contratista Consorcio Vías Terciarias, en la cual ustedes hacen parte de su conformación, actuó de manera dolosa en el entendido que no dio buen manejo al anticipo entregado por el Departamento del Putumayo, Al respecto el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION CUARTA Consejero ponente (E): MARTHA TERESA BRICEÑO DE VALENCIA Bogotá, D.C., en sentencia del veintinueve (29) de abril de dos mil diez (2010) con Radicación número: 25000-23-27-000-2003-02200 01(16883) ha manifestado que: Los CONSORCIO Y UNIONES TEMPORALES – Formas de asumir riesgos / SOLIDARIDAD – Los miembros del consorcio y de la unión temporal responden por las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato / UNION TEMPORAL Y CONSORCIOS – No son personas jurídicas /





CONTRATOS DE COLABORACION O DE AGRUPACION – Lo son los celebrados por las uniones temporales o los consorcios / **UNION TEMPORAL** – Las sanciones se imponen según el grado de participación de cada miembro. Las uniones temporales, al igual que los consorcios, son formas de compartir riesgos entre personas naturales o jurídicas, que tienen capacidad para contratar con las entidades públicas (artículo 6 de la Ley 80 de 1993). Las dos figuras para la presentación de propuestas para la adjudicación, celebración y ejecución de contratos están definidas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. Así pues, tanto los miembros del consorcio como los de la unión temporal responden solidariamente por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. No obstante, en la unión temporal, las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones en mención deben imponerse según el grado de participación de cada miembro en la ejecución de estas, mientras que los integrantes de los consorcios responden solidariamente frente a las sanciones. Además, el consorcio y la unión temporal no son personas jurídicas sino la unión de personas para presentar una propuesta y celebrar y ejecutar un contrato con una entidad pública. Por ello, los acuerdos consorciales y de unión temporal han sido denominados contratos de colaboración o de agrupación. Y, tienen una duración limitada en el tiempo, pues, se repite, se crean solo para la presentación de una propuesta y, si resultan favorecidos, para la adjudicación, celebración y ejecución del contrato correspondiente.

Por lo expuesto se puede determinar que si es posible ordenar medida cautelar de embargo contra JAIME ANDRES CARMONA SUAREZ Y JOHANA ANDREA POSADA PRIETO, como personas naturales y representantes legales de CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA ALFA Y OMEGA SAS. Y CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA FENIX SAS., por cuanto firmas que ustedes representan hacen parte del Consorcio Vías Terciarias, bajo el entendido de que son estos quienes deben encargarse del cumplimiento del objeto social de las obligaciones contractuales.

Como vemos que los recurrentes son representantes legales de dos firmas que conforman el Consorcio Vías Terciarias, estos adquieren responsabilidades originadas por el incumplimiento del contrato, en este caso por el mal manejo del anticipo lo que conlleva a ordenar el embargo preventivo de los bienes en que sea titular los deudores.

Sobre la finalidad de las medidas cautelares, la Corte en Sentencia C-379/04 se pronunció respecto a que: *las medidas cautelares, son aquellos instrumentos con los cuales el ordenamiento protege, de manera provisional, y mientras dura el proceso, la integridad de un derecho que es controvertido en ese mismo proceso. De esa manera el ordenamiento protege preventivamente a quien acude a las autoridades judiciales a reclamar un derecho, con el fin de garantizar que la decisión adoptada sea materialmente ejecutada. Por ello, esta Corporación señaló, en casos anteriores, que estas medidas buscan asegurar el cumplimiento de la decisión que se adopte, porque los fallos serían ilusorios si la ley no estableciera mecanismos para asegurar sus resultados, impidiendo la destrucción o afectación del derecho controvertido. Así mismo sostiene la Corte "Las medidas cautelares tienen amplio sustento constitucional, puesto que desarrollan el principio de eficacia de la administración de justicia, son un elemento integrante del derecho de todas las personas a acceder a la administración de justicia y contribuyen a la igualdad procesal. Sin embargo, la Corte ha afirmado que "aunque el Legislador, goza de una considerable libertad para regular el tipo de instrumentos cautelares y su procedimiento de adopción, debe de todos modos obrar cuidadosamente, por cuanto estas medidas, por su propia naturaleza, se imponen a una persona antes de que ella sea vencida en juicio. Por ende, ... los instrumentos cautelares, por su naturaleza preventiva, pueden llegar a afectar el derecho de defensa y el debido proceso, en la*



medida en que restringen un derecho de una persona, antes de que ella sea condenada en un juicio.

A la segunda inconformidad, Inexistencia de relación contractual ausencia de nexo causal:

Según la legislación colombiana, los integrantes de un consorcio pueden tener un nexo causal con la responsabilidad por incumplimiento de un contrato en caso de mal manejo del anticipo. Los consorcios son considerados como una entidad jurídica que permite a sus miembros actuar en conjunto, lo que implica que los compromisos asumidos por el consorcio son responsabilidad de todos sus integrantes, en este caso existe un mal manejo del anticipo este causa daños y perjuicios al Departamento del Putumayo, por lo que los miembros del consorcio son considerados solidariamente responsables. Esto significa que cualquier miembro puede ser demandado por el total del daño, aunque la responsabilidad interna entre ellos se puede regular por los acuerdos internos del consorcio. Por lo tanto, es fundamental que los consorciados establezcan claramente sus roles y responsabilidades en el contrato de consorcio para evitar conflictos en caso de incumplimiento.

la responsabilidad de los integrantes de un consorcio en relación con el incumplimiento de un contrato, incluido el mal manejo del anticipo, se puede fundamentar en varias normas y principios legales.

1. **Código Civil:** Establece que las obligaciones pueden ser solidarias. Según el artículo 2344, en un contrato donde hay solidaridad, todos los deudores pueden ser obligados a cumplir la totalidad de la deuda.
2. **Ley 80 de 1993:** Esta ley regula la contratación estatal en Colombia y menciona que los consorcios son responsables de manera conjunta e indivisible por las obligaciones derivadas del contrato. Específicamente, el artículo 27 establece que los miembros del consorcio son solidariamente responsables frente a la entidad contratante.
3. **Jurisprudencia:** La Corte Constitucional y el Consejo de Estado han abordado la responsabilidad de los consorcios y su naturaleza solidaria en diversas sentencias, reafirmando que los miembros del consorcio comparten la responsabilidad por el cumplimiento de las obligaciones contractuales, como por ejemplo la sentencia del Consejo de Estado antes mencionada

A la tercera inconformidad: Resolución de contenido equivoco: Como ya se explicó en la respuesta de la primera inconsistencia de conformidad a los principios y demás artículos de la ley 80 y la jurisprudencia citada anteriormente, se puede concluir que los señores JAIME ANDRES CARMONA SUAREZ Y JOHANA ANDREA POSADA PRIETO, en calidad de representantes legales de CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA ALFA Y OMEGA SAS. Y CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA FENIX SAS., por hacer parte de la conformación del Consorcio Vías Terciarias, único contratista, son también responsables de las obligaciones que se desprenden del incumplimiento del contrato en este caso del mal manejo del anticipo.

Con base al título complejo en firme y ejecutoriado, donde se avizora que los concurrentes son obligados a responder por la obligación, la funcionaria ejecutora da inicio al cobro coactivo expidiendo acto administrativo que ordena librar mandamiento de pago y decretar medida cautelar preventiva.

Por lo que los argumentos utilizados en la expedición del mandamiento de pago, expedido por la funcionaria ejecutora no se hace de manera caprichosa, si no en cumplimiento a la normatividad



y jurisprudencia citada a lo largo de este acto administrativo y sobre todo garantizando los derechos a los ejecutados como el debido proceso, de contradicción y defensa. Así mismo el Departamento del Putumayo en calidad de contratante, busca recuperar los dineros entregados al contratista en calidad de anticipo, con el fin de dar cumplimiento a los fines Estatales. La ley 80 de 1.993 en su artículo 3 establece manifiesta que Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines, así mismo el artículo 4 de la citada ley establece que para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales: 1o. Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Iguales exigencias podrán hacer al garante. 2o. Adelantarán las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. 3o. Solicitarán las actualizaciones o la revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos que alteren en su contra el equilibrio económico o financiero del contrato. 4o. Adelantarán revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes suministrados, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, y promoverán las acciones de responsabilidad contra éstos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan.

A la cuarta inconformidad, Inexistencia de título: Teniendo en cuenta que el título que se pretende ejecutar es complejo, porque se encuentra conformado por varios documentos que constituyen una unidad jurídica, por lo que se debe analizar en conjunto todos los documentos que lo integran para librar o no el mandamiento de pago.

En el caso que nos ocupa, el título ejecutivo complejo se conforma de los siguientes actos administrativos:

1º Contrato No 1225 del 28 de diciembre de 2018

2º Póliza de seguros No NB100100416, que garantiza el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato 1225 del 28 de diciembre de 2018 en las siguientes situaciones: la no inversión del anticipo, el uso indebido del anticipo y la apropiación indebida de los recursos recibidos en calidad de anticipo.

3º Resolución No 021 de 2023 que declara el siniestro con cargo al buen manejo y correcta inversión del anticipo, acto administrativo notificado a los ejecutados.

4º Resolución No 022 de 2023 por medio de la cual se resuelve los recursos de reposición en contra de la resolución No 021 de 2023.

5º Constancia de ejecutoria

El título en mención, cumple con los requisitos asignado en el artículo 422 del Código General del Proceso, es claro expreso y exigible, al respecto la sentencia STC720-2021 la Corte a adocinada: "(...) Los requisitos impuestos a los títulos ejecutivos, consignados en el artículo 422 del Código General del Proceso, relativos a tratarse de un documento proveniente del deudor o de su causante en donde conste una obligación clara, expresa y exigible, por supuesto se trasladan a los títulos valores y, en esa medida, si el instrumento no satisface tales presupuestos, no puede seguir adelante el cobro coercitivo (...)"

"(...) La claridad de la obligación, consiste en que el documento que la contenga sea inteligible, inequívoco y sin confusión en el contenido y alcance obligacional de manera que no sea oscuro



con relación al crédito a favor del acreedor y la deuda respecto del deudor. Que los elementos de la obligación, sustancialmente se encuentren presentes: Los sujetos, el objeto y el vínculo jurídico. Tanto el préstamo a favor del sujeto activo, así como la acreencia en contra y a cargo del sujeto pasivo (...).

"(...) La expresividad, como característica adicional, significa que la obligación debe ser explícita, no implícita ni presunta, salvo en la confesión presunta de las preguntas asertivas. No se trata de que no haya necesidad de realizar argumentaciones densas o rebuscadas para hallar la obligación, por cuanto lo meramente indicativo o implícito o tácito al repugnar con lo expreso no puede ser exigido ejecutivamente. Tampoco de suposiciones o de formulación de teorías o hipótesis para hallar el título. Y es exigible en cuanto la obligación es pura y simple o de plazo vencido o de condición cumplida (...)"

En el asunto que nos ocupa, el título se encuentra en firme y ejecutoriado en vía gubernativa, de acuerdo al artículo 87 del CPACA, los actos administrativos quedan ejecutoriados en los siguientes casos:

1° Cuando contra ellos no proceda ningún recurso: Si el acto administrativo no admite ningún recurso, queda ejecutoriado desde el momento de su notificación, publicación o comunicación, según corresponda.

2° Cuando se hayan decidido todos los recursos interpuestos: Si se han presentado recursos en contra del acto administrativo (como el recurso de reposición o el de apelación) y éstos han sido resueltos por la administración, el acto queda ejecutoriado una vez se notifique la decisión que resuelve el último de los recursos interpuestos.

3° Cuando haya vencido el término para interponer recursos sin que estos se hayan presentado: Si el término para interponer recursos en contra del acto administrativo ha expirado y no se ha presentado ningún recurso, el acto queda ejecutoriado al finalizar dicho plazo.

Por otra parte, el artículo 91 del CPACA, establece: *Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.*

Así, las cosas, no es este el momento de cuestionar la legalidad de los actos administrativos que conforman el título ejecutivo complejo, pues bien se notificó en su debido tiempo, dándole oportunidad a los ejecutados para que haga uso de los recursos establecidos por la ley y así garantizarle el debido proceso y de contradicción, el título ejecutivo quedó en firme y ejecutoriado, de tal manera que esta no es la oportunidad para alegar nada previo a la firmeza del título que se pretende ejecutar. Ahora bien, en la etapa de cobro coactivo no deben debatirse situaciones que debieron ser debatidas en vía gubernativa, lo que le impide a este despacho pronunciarse sobre cuestiones de fondo sobre la constitución de la obligación como tal.

Al respecto la Corte Constitucional en **Sentencia C-224/13** ha manifestado: *la naturaleza del cobro coactivo ha sido ampliamente discutida, hasta el punto de que no existe al momento una tesis dominante en la comunidad jurídica. En esta Corporación, por ejemplo, ha prevalecido la tesis de que su ejercicio envuelve la realización de actividades administrativa, por cuanto no están encaminadas a la definición y resolución definitiva de controversias, sino únicamente a la ejecución y materialización de los actos de la propia administración pública.*

Así mismo el Consejo de Estado en **Sentencia T-396/05**, reconoce en su jurisprudencia al advertir que *"el juez de la ejecución no lo es de la validez del acto cuyo cumplimiento se trata, la cual se*





discute por el administrativo a través de los recursos procedentes contra él en la vía gubernativa y si agotada ésta subsiste la controversia, mediante la acción tendiente a que se anulen o modifiquen. Es la correcta aplicación de la ley sustancial, siguiendo el procedimiento debido, la que constituye objeto de tales recursos gubernativos. Y a ello se refiere el inciso 2°. del artículo 561 del C. de P. C., cuando impide debatir en el proceso de jurisdicción coactiva cuestiones que debieron alegarse en la instancia de impugnación gubernativa.

De lo anterior expuesto, no es viable conceder el recurso de reposición y en subsidio el de apelación instaurado contra resolución No 059 del 24 de junio de 2024 y los actos administrativos oficios TGD- 1510 y TGD 1511 del 12 de agosto del 2024, expedidos dentro del proceso 2024-007, de conformidad con el artículo 833 – 1 del E.T.

Así las cosas, el Departamento del Putumayo como Entidad ejecutora, ordenará seguirá adelante con las actuaciones del proceso por jurisdicción coactiva.

En mérito de lo expuesto, la Tesorera General del Departamento del Putumayo, en calidad de funcionaria ejecutora de los procesos que se adelantan por vía coactiva a favor del Departamento del Putumayo,

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR el recurso de reposición en subsidio el de apelación interpuesto por JAIME ANDRES CARMONA SUAREZ Y JOHANA ANDREA POSADA PRIETO, contra el mandamiento de pago resolución No 059 del 24 de junio de 2024 y los actos administrativos oficios TGD- 1510 y TGD 1511 del 12 de agosto del 2024, expedidos dentro del proceso 2024-007, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

SEGUNDO: ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN, del proceso N° 2024-007, adelantados contra la COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. con Nit. 860.037.013 6, CONSORCIO VIAS TERCIARIAS con Nit. 901.240.955 6 y OTROS

TERCERO: NOTIFICAR, el contenido de la presente resolución a los señores JAIME ANDRES CARMONA SUAREZ Y JOHANA ANDREA POSADA PRIETO, en calidad de representantes legales de CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA ALFA Y OMEGA SAS. Y CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA FENIX SAS., o a su apoderado conforme lo establece el artículo 565 del E.T., modificado por el artículo 45 de la ley 1111 de 2006 y 569 de E.T., advirtiéndole que contra la presente no procede recurso alguno, de conformidad con el artículo 833 – 1 del Estatuto Tributario.

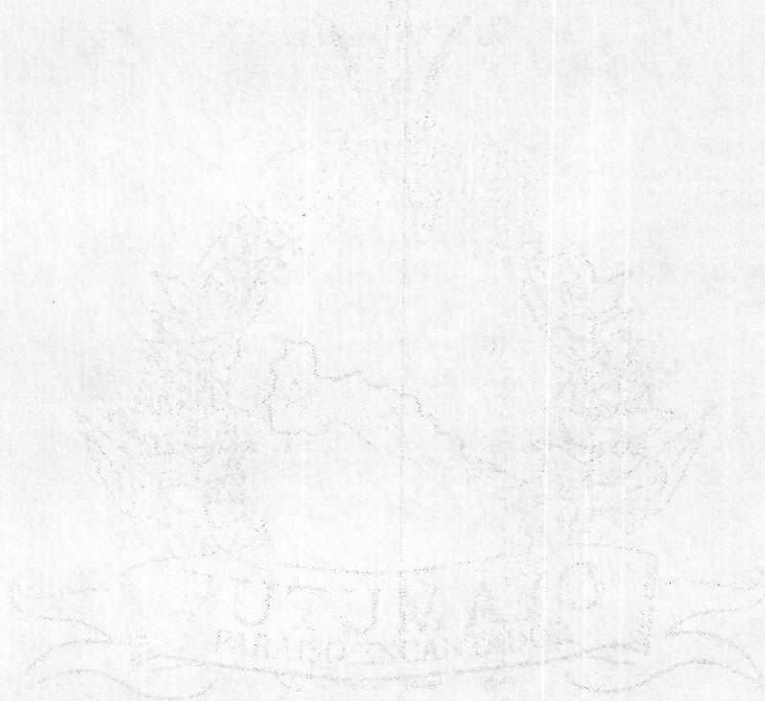
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

VANESSA TATIANA RIVERA SAMBONI
Tesorera General del Departamento del Putumayo

Elaboró	Doris Amparo Ortiz Ordoñez	Secretaria de Hacienda- Tesorería	Profesional Universitario Tesorería- Cobro Coactivo
Revisó	Marlie Yamile Cabrera Bautista	Secretaria de Hacienda- Tesorería	Abogada especialista secretaria de Hacienda- Tesorería



GOBERNACIÓN DEL
PUTUMAYO



Palacio departamental Mocoa, Calle 8 N° 7-40, Código postal: 860001
Conmutador (+608) 4201515 - Fax: 4296196 - Sitio web: www.putumayo.gov.co
contactenos@putumayo.gov.co



GOBERNACIÓN DEL
PUTUMAYO

TGD-2849

San Miguel de Agreda de Mocoa, 13 de noviembre de 2024

Señores:

BANCO AGRARIO

Nit 860013816

ASUNTO: Solicitud de levantamiento de medida cautelar

PROCESOS: 2024-007

DE: Departamento del Putumayo

CONTRA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. con Nit. 860.037.013 6, CONSORCIO VIA
TERCIARIAS con Nit. 901.240.955 6, y OTROS

CONCEPTO: Anticipo no ejecutado cto.1225 de 2018

Cordial saludo


La suscrita Tesorera General del Departamento del Putumayo, competente para adelantar y ejecutar procesos por jurisdicción coactiva a favor del Departamento del Putumayo, con el presente, me permito informar que dentro del proceso 2024-007, la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. con Nit. 860.037.013 6, mediante póliza No 02-41-101000364 anexo 0 del 31 de julio de 2024, garantizó la obligación pendiente por pagar contenida en el proceso en mención, por lo que se solicita a su Entidad Bancaria, el levantamiento de la medida cautelar ordenada mediante resolución No 059 del 24 de junio de 2024, sobre los bienes de titularidad de CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA ALFA Y OMEGA SAS, Nit 900.951.327-8, R/L JAIME ANDRÉS CARMONA SUAREZ, identificado con cedula de ciudadanía No 14.465.639, CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA FENIX SAS, Nit 900.825.192-1, R/L JOHANA ANDREA POSADA PRIETO, identificada con cedula No 38.561.793.

Agradezco su valiosa colaboración.

Atentamente



VANESSA TATIANA RIVERA SAMBONI
Tesorera General del Departamento del Putumayo

Proyectó	Doris Amparo Ortiz Ordóñez	Secretaría de Hacienda- Tesorería	Profesional Universitario Tesorería-Cobro Coactivo	
Revisó	Marlie Yamile Cabrera Bautista	Secretaría de Hacienda- Tesorería	Abogada especialista Secretaría de Hacienda- Tesorería	

SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE EMBARGO

1 mensaje

Cobro Coactivo <cobro.coactivo@putumayo.gov.co>
Para: centraldeembargos@bancoagrario.gov.co

15 de noviembre de 2024, 5:38 p.m.

Cordial saludo,

Por medio del presente solicito comedidamente se proceda con el levantamiento de la medida cautelar de embargo sobre el contribuyente mencionado en el oficio.

Atentamente,

Tesoreria-Cobro coactivo
Gobernación del Putumayo



LEVANTAMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR- BANCO AGRARIO_2024-11-15_1.PDF

529K

TGD-2847

San Miguel de Ágreda de Mocoa 13 de noviembre de 2024

Señores:

JAIME ANDRES CARMONA SUAREZ Y JOHANA ANDREA POSADA PRIETO R/L DE CONSTRUCCIONES y OBRAS DE INGENIERIA ALFA Y OMEGA S.A.S. y CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA FENIX S.A.S.

Av. 4N No. 6N - 67 Of. 602 edificio Torre empresarial Siglo XXI

Correo electrónico: Correos electrónicos: jaimecarmona82@yahoo.com contabilidad@edificar.org

REF: Respuesta a peticiones 20241106-E-006793

ASUNTO: Proceso Administrativo de cobro coactivo 2024-007

DE: Departamento del Putumayo

CONTRA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. con Nit. 860.037.013 6, CONSORCIO VIAS TERCARIAS con Nit. 901.240.955 6 y OTROS

Atento Saludo

En atención a la solicitud presentada por JAIME ANDRES CARMONA SUAREZ Y JOHANA ANDREA POSADA PRIETO como R/L DE CONSTRUCCIONES y OBRAS DE INGENIERIA ALFA Y OMEGA S.A.S. y CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA FENIX S.A.S. respetuosamente y dentro del término legal contemplado en la Ley 1755 del 30 de junio de 2015, con el presente me permito dar respuesta de fondo a su solicitud en los siguientes términos:

Me permito recordarles que sus inconformidades referidas a no ser responsables de la obligación contenida en el título ejecutivo enviado por la oficina de contratación respecto al incumplimiento del contrato 1225 de 2018 por mal manejo en el anticipo fueron resueltas en la respuesta del recurso de reposición, no obstante sustraigo aportes importantes para esta ilustración así: *"Conforme a la ley 80 de 1.993 y la sentencia C949 de 2001 de la Corte Constitucional, en la cual hace referencia a los Consorcios y el principio de la autonomía de la voluntad, entendida para el caso, como la autonomía de la voluntad privada, establecida como la facultad reconocida por el ordenamiento positivo a las personas para suponer de sus intereses con efecto vinculante, y por tanto para para crear derechos y obligaciones con los límites generales del orden público y las buenas costumbres, para el caso concreto la inclusión de nuevos miembros al consorcio vías terciarias se realizó basado en el principio de la autonomía de la voluntad de los consorciados que concurrieron inicialmente a presentar propuesta dentro del proceso de licitación pública detonante del contrato 1225 de 2018 y que suscribieron el contrato y empezaron a ejecutarlo; asumiendo obligaciones, responsabilidades y derechos, así mismo lo fue la voluntad de JAIME ANDRES CARMONA SUAREZ Y JOHANA ANDREA POSADA PRIETO, como personas naturales y representantes legales de CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA ALFA Y OMEGA SAS. Y CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA FENIX SAS., y es precisamente que a partir*

de que quedó perfeccionada la inclusión de los nuevos miembros al Consorcio vías terciarias es que estos fueron objeto de derechos y obligaciones que no fueron necesariamente las que se generaron a partir de ese momento hacia futuro, sino que también asumieron las que el Consorcio Vías Terciarias como único contratista de obra tuvo a partir del

momento de la legalización y perfeccionamiento del contrato desde y hacia la entidad contratante, dicho en otras palabras, la inclusión de nuevos miembros dada la solidaridad que se predica del contrato, es que no se puede escindir un antes de la inclusión de los miembros y un después de la misma, en razón a que cuando los otros nuevos miembros tomaron la decisión libre y espontánea de entrar a integrar el Consorcio Vías Terciarias en el ejercicio de la autonomía de la voluntad, lo hicieron en consideración a su carácter de contratistas del Estado –el Consorcio, y por ende, a participar no solamente de las utilidades que se derivarían de la ejecución del negocio jurídico, sino también para ser sujetos de obligaciones de dar hacer o de no hacer a las que el Consorcio se comprometió inicialmente, sin importar si los nuevos miembros participaron o no de la ejecución del anticipo, pues el contrato es uno solo el contratista lo es también, pues más allá de su composición siempre ha sido el Consorcio Vías Terciarias. **La misma ley establece que los consorcios se constituyen como una figura en la que varias entidades se agrupan para llevar a cabo un proyecto específico. En principio, los miembros del consorcio responden solidariamente por el cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas ante el contratante.**

En este mismo sentido el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha en Auto del 4 de julio de 2019, Sala de Decisión Civil señala: (...)“Así las cosas, tenemos que el consorcio no es una persona jurídica, que no goza de patrimonio propio, sino de la suma de un esfuerzo común para lograr un objetivo común y concreto, conservando independencia patrimonial respecto de cada uno de los integrantes, el cual se manifiesta bajo el vínculo contractual y no societario; sin perjuicio de lo anterior debe cumplir con unas condiciones formales, tributarias y legales, que le exigen nombrar un “administrador” el cual lejos de un representante legal, es quien debe encargarse del cumplimiento del objeto social, cumplimiento de obligaciones de los contratantes, de tal suerte que el consorcio convierte en solidarios a los contratantes de las obligaciones contraídas dentro del periodo de vigencia del contrato frente a terceros.”(...) subraya y negrita fuera de texto.

La Jurisprudencia señala que los CONTRATOS DE COLABORACION O DE AGRUPACION – Lo son los celebrados por las uniones temporales o los consorcios / UNION TEMPORAL – Las sanciones se imponen según el grado de participación de cada miembro Las uniones temporales, al igual que los consorcios, son formas de compartir riesgos entre personas naturales o jurídicas, que tienen capacidad para contratar con las entidades públicas (artículo 6 de la Ley 80 de 1993). Las dos figuras para la presentación de propuestas para la adjudicación, celebración y ejecución de contratos están definidas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. Así pues, tanto los miembros del consorcio como los de la unión temporal responden solidariamente por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. No obstante, en la unión temporal, las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones en mención deben imponerse según el grado de participación de cada miembro en la ejecución de estas, mientras que los integrantes de los consorcios responden solidariamente frente a las sanciones. Además, el consorcio y la unión temporal no son personas jurídicas sino la unión de personas para presentar una propuesta y celebrar y ejecutar un contrato con una entidad pública. Por ello, los acuerdos consorciales y de unión temporal han sido denominados contratos de colaboración o de agrupación. Y, tienen una duración limitada en el tiempo, pues, se repite, se crean solo para la presentación de una propuesta y, si resultan favorecidos, para la adjudicación, celebración y ejecución del contrato correspondiente.


Por lo antes expuesto, vemos que los señores JAIME ANDRES CARMONA SUAREZ Y JOHANA ANDREA POSADA PRIETO, como representantes legales de las firmas

CA

Por otra parte, me permito informarle que mediante acta la Administración Departamental aprobó la póliza de seguros judiciales No 02-41-101000364, en donde la Compañía Mundial de Seguros, aseguro el saldo de la obligación contenida en el proceso No 2024-007, la suma de 4.893.197.303, con vigencia por el término que dure el proceso en todas sus instancias.

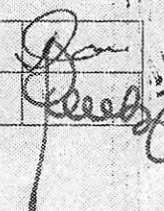
Por lo antes expuesto, es procedente ordenar el levantamiento de la medida cautelar en su contra, pero el proceso seguirá activo, hasta tanto exista pronunciamiento del juez competente donde ordene el archivo del proceso o la exoneración de responsabilidad en su contra.

Cordialmente,



VANESSA TATIANA RIVERA SAMBONI
Tesorera General del Departamento del Putumayo

Elaboró	Doris Amparo Ortiz Ordoñez	Secretaría de Hacienda-Tesorería	Profesional Universitario Tesorería-Cobro Coactivo
Revisó	Marlie Yamile Cabrera Bautista	Secretaría de Hacienda-Tesorería	Abogada especialista secretaria de Hacienda-Tesorería



RESPUESTA A PETICIONES 20241106- E-006793

1 mensaje

Cobro Coactivo <cobro.coactivo@putumayo.gov.co>

15 de noviembre de 2024, 5:13 p.m.

Para: jaimecarmona82@yahoo.com, contabilidad@edifikar.org

Cordial saludo

Con el presente me permito notificarles la respuesta a peticiones 20241106-E-006793.

Anexo el acto administrativo en mención 3 folios.

Atentamente,

Tesorería-Cobro coactivo
Gobernación del Putumayo



RESPUESTA A PETICIONES 20241106- E-006793_2024-11-15_1.PDF
2183K



TGD-2850

San Miguel de Agreda de Mocoa, 13 de noviembre de 2024

Señores:

BANCO DE BOGOTA

NIT 860002964-4

Tel. 3183475412 – E-mail: rjudicial@bancodebogota.com.co

ASUNTO: Solicitud de levantamiento de medida cautelar

PROCESOS: 2024-007

DE: Departamento del Putumayo

CONTRA: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. con Nit. 860.037.013 6, CONSORCIO VIAS
TERCIARIAS con Nit. 901.240.955 6, y OTROS

CONCEPTO: Anticipo no ejecutado cto.1225 de 2018


Cordial saludo

La suscrita Tesorera General del Departamento del Putumayo, competente para adelantar y ejecutar procesos por jurisdicción coactiva a favor del Departamento del Putumayo, con el presente, me permito informar que dentro del proceso 2024-007, la COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. con Nit. 860.037.013 6, mediante póliza No 02-41-101000364 anexo 0 del 31 de julio de 2024, garantizó la obligación pendiente por pagar contenida en el proceso en mención, por lo que se solicita a su Entidad Bancaria, el levantamiento de la medida cautelar ordenada mediante resolución No 059 del 24 de junio de 2024, sobre los bienes de titularidad de CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA ALFA Y OMEGA SAS, Nit 900.951.327-8, R/L JAIME ANDRÉS CARMONA SUAREZ, identificado con cedula de ciudadanía No 14.465.639, CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA FENIX SAS, Nit 900.825.192-1, R/L JOHANA ANDREA POSADA PRIETO, identificada con cedula No 38.561.793.

Agradezco su valiosa colaboración.

Atentamente


VANESSA TATIANA RIVERA SAMBONI
Tesorera General del Departamento del Putumayo

Proyecto	Doris Amparo Ortiz Ordóñez	Secretaría de Hacienda- Tesorería	Profesional Universitario Tesorería-Cobro Coactivo	
Revisó	Marle Yamile Cabrera Bautista	Secretaría de Hacienda- Tesorería	Abogada especialista Secretaría de Hacienda- Tesorería	

SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE EMBARGO

1 mensaje

Cobro Coactivo <cobro.coactivo@putumayo.gov.co>

15 de noviembre de 2024, 5:39 p.m.

Para: rjudicial@bancodebogota.com.co

Cordial saludo,

Por medio del presente solicito comedidamente se proceda con el levantamiento de la medida cautelar de embargo sobre el contribuyente mencionado en el oficio.

Atentamente,

Tesoreria-Cobro coactivo
Gobernación del Putumayo



LEVANTAMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR- BANCO BOGOTA_2024-11-15_1.PDF

552K

TGD-2851

San Miguel de Agreda de Mocoa, 13 de noviembre de 2024

Señores:

BANCOLOMBIA
NIT 890903938-8

ASUNTO: Solicitud de levantamiento de medida cautelar

PROCESOS: 2024-007

DE: Departamento del Putumayo

CONTRA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. con Nit. 860.037.013 6, CONSORCIO VIAS
TERCIARIAS con Nit. 901.240.955 6, y OTROS


CONCEPTO: Anticipo no ejecutado cto.1225 de 2018


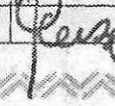
Cordial saludo

La suscrita Tesorera General del Departamento del Putumayo, competente para adelantar y ejecutar procesos por jurisdicción coactiva a favor del Departamento del Putumayo, con el presente, me permito informar que dentro del proceso 2024-007, la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. con Nit. 860.037.013 6, mediante póliza No 02-41-101000364 anexo 0 del 31 de julio de 2024, garantizó la obligación pendiente por pagar contenida en el proceso en mención, por lo que se solicita a su Entidad Bancaria, el levantamiento de la medida cautelar ordenada mediante resolución No 059 del 24 de junio de 2024, sobre los bienes de titularidad de CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA ALFA Y OMEGA SAS, Nit 900.951.327-8, R/L JAIME ANDRÉS CARMONA SUAREZ, identificado con cedula de ciudadanía No 14.465.639, CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA FENIX SAS, Nit 900.825.192-1, R/L JOHANA ANDREA POSADA PRIETO, identificada con cedula No 38.561.793.

Agradezco su valiosa colaboración.

Atentamente


VANESSA TATIANA RIVERA SAMBONI
Tesorera General del Departamento del Putumayo

Proyectó	Doris Amparo Ortiz Ordoñez	Secretaría de Hacienda- Tesorería	Profesional Universitario Tesorería-Cobro Coactivo	
Revisó	Maribel Yamile Cabrera Bautista	Secretaría de Hacienda- Tesorería	Abogada especialista Secretaría de Hacienda- Tesorería	

SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE EMBARGO

1 mensaje

Cobro Coactivo <cobro.coactivo@putumayo.gov.co>
Para: requerinf@bancolombia.com.co

15 de noviembre de 2024, 5:39 p.m.

Cordial saludo,

Por medio del presente solicito comedidamente se proceda con el levantamiento de la medida cautelar de embargo sobre el contribuyente mencionado en el oficio.

Atentamente,

Tesoreria-Cobro coactivo
Gobernación del Putumayo



LEVANTAMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR- BANCOLOMBIA_2024-11-15_1.PDF
528K



TGD-2852

San Miguel de Agreda de Mocoa, 13 de noviembre de 2024

Señores:

BANCO BBVA

NIT 860003020-1

ASUNTO: Solicitud de levantamiento de medida cautelar

PROCESOS: 2024-007

DE: Departamento del Putumayo

CONTRA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. con Nit. 860.037.013 6, CONSORCIO VIAS
TERCIARIAS con Nit. 901.240.955 6, y OTROS


CONCEPTO: Anticipo no ejecutado cto.1225 de 2018


Cordial saludo

La suscrita Tesorera General del Departamento del Putumayo, competente para adelantar y ejecutar procesos por jurisdicción coactiva a favor del Departamento del Putumayo, con el presente, me permito informar que dentro del proceso 2024-007, la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. con Nit. 860.037.013 6, mediante póliza No 02-41-101000364 anexo 0 del 31 de julio de 2024, garantizó la obligación pendiente por pagar contenida en el proceso en mención, por lo que se solicita a su Entidad Bancaria, el levantamiento de la medida cautelar ordenada mediante resolución No 059 del 24 de junio de 2024, sobre los bienes de titularidad de CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA ALFA Y OMEGA SAS, Nit 900.951.327-8, R/L JAIME ANDRÉS CARMONA SUAREZ, identificado con cedula de ciudadanía No 14.465.639, CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA FENIX SAS, Nit 900.825.192-1, R/L JOHANA ANDREA POSADA PRIETO, identificada con cedula No 38.561.793.

Agradezco su valiosa colaboración.

Atentamente


VANESSA TATIANA RIVERA SAMBONI
Tesorera General del Departamento del Putumayo

Proyectó	Doris Amparo Ortiz Ordoñez	Secretaría de Hacienda- Tesorería	Profesional Universitario Tesorería-Cobro Coactivo	
Revisó	Murilo Yamile Cabrera Bautista	Secretaría de Hacienda- Tesorería	Abogada especialista Secretario de Hacienda- Tesorería	

SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE EMBARGO

1 mensaje

Cobro Coactivo <cobro.coactivo@putumayo.gov.co>

15 de noviembre de 2024, 5:40 p.m.

Para: embargos.colombia@bbva.com

Cordial saludo,

Por medio del presente solicito comedidamente se proceda con el levantamiento de la medida cautelar de embargo sobre el contribuyente mencionado en el oficio.

Atentamente,

Tesoreria-Cobro coactivo
Gobernación del Putumayo



LEVANTAMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR- BANCO BBVA_2024-11-15_1.PDF

598K



TGD-2853

San Miguel de Agreda de Mocoa, 13 de noviembre de 2024

Señores:

BANCO POPULAR

NIT 860007738-9

ASUNTO: Solicitud de levantamiento de medida cautelar

PROCESOS: 2024-007

DE: Departamento del Putumayo

CONTRA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. con Nit. 860.037.013 6, CONSORCIO VIAS
TERCIARIAS con Nit. 901.240.955 6, y OTROS


CONCEPTO: Anticipo no ejecutado cto.1225 de 2018

Cordial saludo

La suscrita Tesorera General del Departamento del Putumayo, competente para adelantar y ejecutar procesos por jurisdicción coactiva a favor del Departamento del Putumayo, con el presente, me permito informar que dentro del proceso 2024-007, la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. con Nit. 860.037.013 6, mediante póliza No 02-41-101000364 anexo 0 del 31 de julio de 2024, garantizó la obligación pendiente por pagar contenida en el proceso en mención, por lo que se solicita a su Entidad Bancaria, el levantamiento de la medida cautelar ordenada mediante resolución No 059 del 24 de junio de 2024, sobre los bienes de titularidad de CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA ALFA Y OMEGA SAS, Nit 900.951.327-8, R/L JAIME ANDRÉS CARMONA SUAREZ, identificado con cedula de ciudadanía No 14.465.639, CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA FENIX SAS, Nit 900.825.192-1, R/L JOHANA ANDREA POSADA PRIETO, identificada con cedula No 38.561.793.

Agradezco su valiosa colaboración.

Atentamente


VANESSA TATIANA RIVERA SAMBONI
Tesorera General del Departamento del Putumayo

Proyectó	Doris Amparo Ortiz Ordoñez	Secretaria de Hacienda- Tesorería	Profesional Universidad de Tesorería-Cobra Coactivo
Revisó	Alirio Yamile Cabrera Bautista	Secretaria de Hacienda- Tesorería	Abogada especialista Secretaria de Hacienda- Tesorería

SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE EMBARGO

1 mensaje

Cobro Coactivo <cobro.coactivo@putumayo.gov.co>

15 de noviembre de 2024, 5:41 p.m.

Para: embargos@bancopopular.com.co, requerimientos_deembargos@bancopopular.com.co

Cordial saludo,

Por medio del presente solicito comedidamente se proceda con el levantamiento de la medida cautelar de embargo sobre el contribuyente mencionado en el oficio.

Atentamente,

Tesoreria-Cobro coactivo
Gobernación del Putumayo



LEVANTAMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR- BANCO POPULAR_2024-11-15_1.PDF
512K



GOBERNACIÓN DEL
PUTUMAYO

TGD-2854

San Miguel de Agreda de Mocoa, 13 de noviembre de 2024

Señores:

BANCO DAVIVIENDA S.A

Tel. 3300000, - E-mail: notificacionesjudiciales@davivienda.com.co

ASUNTO: Solicitud de levantamiento de medida cautelar

PROCESOS: 2024-007

DE: Departamento del Putumayo

CONTRA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. con Nit. 860.037.013 6, CONSORCIO VIA

TERCIARIAS con Nit. 901.240.955 6, y OTROS


CONCEPTO: Anticipo no ejecutado cto.1225 de 2018


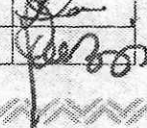
Cordial saludo

La suscrita Tesorera General del Departamento del Putumayo, competente para adelantar y ejecutar procesos por jurisdicción coactiva a favor del Departamento del Putumayo, con el presente, me permito informar que dentro del proceso 2024-007, la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. con Nit. 860.037.013 6, mediante póliza No 02-41-101000364 anexo 0 del 31 de julio de 2024, garantizó la obligación pendiente por pagar contenida en el proceso en mención, por lo que se solicita a su Entidad Bancaria, el levantamiento de la medida cautelar ordenada mediante resolución No 059 del 24 de junio de 2024, sobre los bienes de titularidad de CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA ALFA Y OMEGA SAS, Nit 900.951.327-8, R/L JAIME ANDRÉS CARMONA SUAREZ, identificado con cedula de ciudadanía No 14.465.639, CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA FENIX SAS, Nit 900.825.192-1, R/L JOHANA ANDREA POSADA PRIETO, identificada con cedula No 38.561.793.

Agradezco su valiosa colaboración.

Atentamente


VANESSA TATIANA RIVERA SAMBONI
Tesorera General del Departamento del Putumayo

Proyectó	Doris Amparo Ortiz Ordoñez	Secretaria de Hacienda- Tesorería	Profesional Universitario Tesorería-Cobro Coactivo	
Revisó	Mariño Yamile Cabrera Bautista	Secretaria de Hacienda- Tesorería	Abogada especialista Secretaria de Hacienda- Tesorería	

SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE EMBARGO

1 mensaje

Cobro Coactivo <cobro.coactivo@putumayo.gov.co>

15 de noviembre de 2024, 5:41 p.m.

Para: embargosfidudavivienda@davivienda.com, notificacionesjudiciales@davivienda.com

Cordial saludo,

Por medio del presente solicito comedidamente se proceda con el levantamiento de la medida cautelar de embargo sobre el contribuyente mencionado en el oficio.

Atentamente,

Tesoreria-Cobro coactivo
Gobernación del Putumayo



LEVANTAMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR- BANCO DAVIVIENDA_2024-11-15_1.PDF

618K

TGD-2855

San Miguel de Agreda de Mocoa, 13 de noviembre de 2024

Señores:

BANCO OCCIDENTE S.A

Tel. 018000514652 E-mail: Djuridica@bancodeoccidente.com.co

ASUNTO: Solicitud de levantamiento de medida cautelar

PROCESOS: 2024-007

DE: Departamento del Putumayo

CONTRA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. con Nit. 860.037.013 6, CONSORCIO VIA
TERCIARIAS con Nit. 901.240.955 6, y OTROS


CONCEPTO: Anticipo no ejecutado cto.1225 de 2018

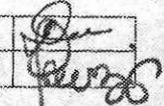
Cordial saludo

La suscrita Tesorera General del Departamento del Putumayo, competente para adelantar y ejecutar procesos por jurisdicción coactiva a favor del Departamento del Putumayo, con el presente, me permito informar que dentro del proceso 2024-007, la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. con Nit. 860.037.013 6, mediante póliza No 02-41-101000364 anexo 0 del 31 de julio de 2024, garantizó la obligación pendiente por pagar contenida en el proceso en mención, por lo que se solicita a su Entidad Bancaria, el levantamiento de la medida cautelar ordenada mediante resolución No 059 del 24 de junio de 2024, sobre los bienes de titularidad de CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA ALFA Y OMEGA SAS, Nit 900.951.327-8, R/L JAIME ANDRÉS CARMONA SUAREZ, identificado con cedula de ciudadanía No 14.465.639, CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA FENIX SAS, Nit 900.825.192-1, R/L JOHANA ANDREA POSADA PRIETO, identificada con cedula No 38.561.793.

Agradezco su valiosa colaboración.

Atentamente


VANESSA TATIANA RIVERA SAMBONI
Tesorera General del Departamento del Putumayo

Proyecto	Doris Amparo Ortiz Ordoñez	Secretaría de Hacienda- Tesorería	Profesional Universitario Tesorería-Cobro Coactivo	
Revisó	Marile Yamile Cabrera Bautista	Secretaría de Hacienda- Tesorería	Abogada especialista Secretaría de Hacienda- Tesorería	

SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE EMBARGO

1 mensaje

Cobro Coactivo <cobro.coactivo@putumayo.gov.co>

15 de noviembre de 2024, 5:42 p.m.

Para: DJuridica@bancodeoccidente.com.co

Cordial saludo,

Por medio del presente solicito comedidamente se proceda con el levantamiento de la medida cautelar de embargo sobre el contribuyente mencionado en el oficio.

Atentamente,

Tesorería-Cobro coactivo
Gobernación del Putumayo



LEVANTAMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR- BANCO OCCIDENTE_2024-11-15_1.PDF

621K



TGD-2856

San Miguel de Agreda de Mocoa, 13 de noviembre de 2024

Señores:

BANCO AV. VILLAS S.A

NIT 860035827-5

E-mail: notificacionesjudiciales@bancoavvillas.com.co

ASUNTO: Solicitud de levantamiento de medida cautelar

PROCESOS: 2024-007

DE: Departamento del Putumayo

CONTRA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. con Nit. 860.037.013 6, CONSORCIO VIAL TERCARIAS con Nit. 901.240.955 6, y OTROS


CONCEPTO: Anticipo no ejecutado cto.1225 de 2018

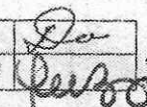
Cordial saludo

La suscrita Tesorera General del Departamento del Putumayo, competente para adelantar y ejecutar procesos por jurisdicción coactiva a favor del Departamento del Putumayo, con el presente, me permito informar que dentro del proceso 2024-007, la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. con Nit. 860.037.013 6, mediante póliza No 02-41-101000364 anexo 0 del 31 de julio de 2024, garantizó la obligación pendiente por pagar contenida en el proceso en mención, por lo que se solicita a su Entidad Bancaria, el levantamiento de la medida cautelar ordenada mediante resolución No 059 del 24 de junio de 2024, sobre los bienes de titularidad de CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA ALFA Y OMEGA SAS, Nit 900.951.327-8, R/L JAIME ANDRÉS CARMONA SUAREZ, identificado con cedula de ciudadanía No 14.465.639, CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA FENIX SAS, Nit 900.825.192-1, R/L JOHANA ANDREA POSADA PRIETO, identificada con cedula No 38.561.793.

Agradezco su valiosa colaboración.

Atentamente


VANESSA TATIANA RIVERA SAMBONI
Tesorera General del Departamento del Putumayo

Proyecto	Doris Amparo Ortiz Ordoñez	Secretaría de Hacienda- Tesorería	Profesional Universitaria Tesorería-Coactivo	
Revisó	Marlie Yamile Cabrera Bautista	Secretaría de Hacienda- Tesorería	Abogada especialista Secretaría de Hacienda- Tesorería	

SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE EMBARGO

1 mensaje

Cobro Coactivo <cobro.coactivo@putumayo.gov.co>
Para: notificacionesjudiciales@bancoavvillas.com.co

15 de noviembre de 2024, 5:43 p.m.

Cordial saludo,

Por medio del presente solicito comedidamente se proceda con el levantamiento de la medida cautelar de embargo sobre el contribuyente mencionado en el oficio.

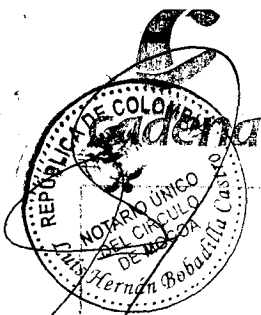
Atentamente,

Tesoreria-Cobro coactivo
Gobernación del Putumayo

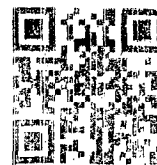


LEVANTAMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR- BANCO AV VILLAS_2024-11-15_1.PDF

626K



República de Colombia



Aa090479110



Ca4576

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE MOCOA

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO.------(8)-----

OCHO.-----

FECHA DE OTORGAMIENTO.- DIEZ (10) DE ENERO DE DOS MIL
VEINTICUATRO (2024).-----

CLASE DE ACTO O CONTRATO.-----

PODER GENERAL.-----

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO.-----

CARLOS ANDRES MARROQUIN LUNA (Representante legal del Departamento
del Putumayo, NIT No. 800094164-4).-----

EL(LA) PODERDANTE.-----

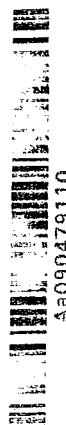
ANDRES PABLO DE JESUS RODRIGUEZ SOSA (Jefe de la oficina Asesora
Jurídica de la Gobernación del Putumayo).-----

EL(LA) APODERADO(A).-----

VALOR DEL ACTO.----- SIN CUANTIA

En la ciudad de San Miguel de Agreda de Mocoa, Departamento del Putumayo,
República de Colombia, a los DIEZ (10) días del mes de ENERO de dos mil
veinticuatro (2024), ante el doctor LUIS HERNAN BOBADILLA CASTRO, Notario
titular de la Notaria Única del Circulo de Mocoa, se otorgó la presente escritura
que se consigna en los siguientes términos: -----

Comparecido el(la) señor(a) CARLOS ANDRES MARROQUIN LUNA, persona
mayor de edad, vecino(a) de esta ciudad de Mocoa (Putumayo), identificado(a) con
cedula de ciudadanía número 1124848005 DE MOCOA, quien obra en nombre y



Aa090479110

No. 11-23 1137541 QGAC 11A

11-23

1137541 QGAC 11A

Representación del **Departamento del Putumayo**, NIT No. 800094164-4, en condición de **Gobernador**, según consta en la **Credencial expedida por la Registraduría Nacional del estado Civil y acta de posesión**, documentos que se anexan para su protocolización, hábil para para contratar y obligarse y que en el presente documento se denominará **EL DEPARTAMENTO**, declaro que por medio del presente documento confiere **PODER GENERAL, AMPLIO Y SUFICIENTE**, a el(la) señor(a) **ANDRES PABLO DE JESUS RODRIGUEZ SOSA**, persona mayor de edad, vecino(a) de esta ciudad de Mocoa (Putumayo), identificado(a) con cedula de ciudadanía número **80375083 DE GACHETA, CON T.P. No. 116784 DEL C.S de la J.**, también hábil para contratar y obligarse, quien actúa como **Jefe de la oficina Asesora Jurídica de la Gobernación del Putumayo**, como consta en el **Decreto No. 022 del 2 de enero de 2024 y acta de posesión**, documentos que que también se anexan para su protocolización, quien en adelante se denominara **EL APODERADO**, para que en nombre del **DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO** sin limitación alguna y con las más amplias facultades, en cualquier momento y sin consideración a la cuantía y calidad, lo represente judicial y extrajudicialmente en todo lo relacionado con los procesos de naturaleza judicial y/o administrativa que se promuevan en contra del **DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO** o con su participación como parte o sujeto procesal, interviniente, convocado o en cualquier calidad que las normas procesales o administrativas señalen. **EL APODERADO** tendrá amplias facultades en todas las actividades en las que actúe en representación del **DEPARTAMENTO**, especialmente en los siguientes casos que son meramente enunciativos: _____

PRIMERO.- REPRESENTACION JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL Y ADMINISTRATIVA: Para que represente al **DEPARTAMENTO** de manera directa o



Ca45761

cadena.

República de Colombia

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificadas y documentos del archivo notarial

mediante apoderados especiales si hay lugar a ello, ante cualquier autoridad judicial civil y administrativa en toda clase de procesos, actuaciones o diligencias, bien sea como demandante o como demandado o como coadyuvante en cualesquiera de las partes, para iniciar o continuar hasta su terminación procesos, actuaciones o diligencias respectivas.-----

SEGUNDO.- REPRESENTACION EN DILIGENCIAS DE CONCILIACIÓN: Para que represente al DEPARTAMENTO de manera directa o mediante, apoderados especiales si hay lugar a ello ante las autoridades que competentes, en toda clase de diligencias de conciliación judiciales y/o extrajudiciales, bien sea como convocante como convocado, para iniciar o continuar hasta la terminación del proceso, actuaciones o diligencias respectivas.-----

TERCERO.- APODERADOS: El apoderado podrá otorgar poder o sustituir; el poder conferido para un negocio determinado por medio de memorial.-----

CUARTO.- REPRESENTACION GENERAL: El apoderado queda investido de la facultades de que trata el artículo 77 del Código General Del Proceso y en general para que asuma la total personería y representación del DEPARTAMENTO, ya que las estipulaciones del presente poder no son taxativas sino simplemente indicativas de las más amplias facultades de representación judicial o extrajudicial. Este poder se confiere en el ejercicio de- representación legal de la entidad Departamental y quien lo acepta lo hace en ejercicio de sus funciones y por lo cual el departamento realiza el pago de su salario.-----

Presente el(la) señor(a) **ANDRES PABLO DE JESUS RODRIGUEZ SOSA**, persona mayor de edad, vecino(a) de esta ciudad de Mocoa (Putumayo), identificado(a) con cedula de ciudadanía número **80375083 DE GACHETA, CON T.P. No. 116784 DEL C.S de la J.**, declaró: -----

11371QMAMAYV:G5a

08-11-23

Escudo

Que acepta el poder general que por medio de esta escritura le confiere el(la) señor(a) **CARLOS ANDRES MARROQUIN LUNA**, persona mayor de edad, vecino(a) de esta ciudad de Mocoa (Putumayo), identificado(a) con cedula de ciudadanía número **1124848005 DE MOCOA**, quien obra en nombre y Representación del Departamento del Putumayo, en las calidades antes anotadas y que hará uso de él cuando sea oportuno y que se entenderá vigente el presente poder en tanto no sea revocado expresamente por mí o no se den las causales que la ley establece para su terminación.-----

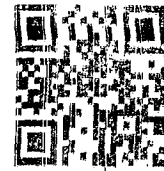
NOTA.- EL(LOS) COMPARECIENTE(S) HACE(N) CONSTAR QUE:-----

1.- Ha(n) verificado cuidadosamente sus nombres, estado(s) civil(es) y el(los) numero(s) de identificación(es) de identidad y declara(n) que todas las informaciones consignadas en el presente instrumento público son correctas, en consecuencia asume(n) la responsabilidad que se derive de cualquier inexactitud en los mismos, exonerando al Notario y a los funcionarios de cualquier inexactitud, dado que han revisado, aceptado y dado consentimiento al texto que firman.-----

2.- Conocen la ley y saben que el Notario responde de la regularidad formal de los instrumentos que autoriza, pero no de la veracidad de las declaraciones de el(los) compareciente(s), tampoco responde de la capacidad o aptitud legal de estos para celebrar el acto o contrato respectivo.-----

3.- Que han verificado cuidadosamente el texto de la presente escritura, con el fin de aclararla, modificarla o corregirla antes de firmarla, con sus firmas demuestran la total aprobación de la escritura y en caso de presentarse errores, estos deben ser corregidos mediante otorgamiento de nueva escritura, suscrita por todos los que intervinieron en la inicial (Art. 102 Decreto Ley 960 de 1.970).-----

4.- Que las declaraciones emitidas por ellos deben obedecer a la verdad, que son



Aa090479112



C#4576

República de Colombia

cadena.

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial

responsables penal y civilmente en el evento que se utilice este instrumento con fines fraudulentos o ilegales, que la Notaria se abstiene de dar fe sobre el querer de los otorgantes que no se expresó en este documento. -----

DOCUMENTOS PRESENTADOS. -----

FOTOCOPIAS DE LAS CEDULAS DE CIUDADANÍA DE LOS COMPARECIENTES, CREDENCIAL EXPEDIDA POR LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL Y ACTA DE POSESIÓN DEL GOBERNADOR, ACTO ADMINISTRATIVO DE NOMBRAMIENTO Y ACTA DE POSESION DEL JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA Y RUT DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.-----

AUTORIZACIÓN Y OTORGAMIENTO. -----

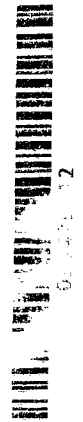
Leído este público instrumento en presencia de los comparecientes, de conformidad con el Artículo 35 del Decreto Ley 960 de 1970, lo encontraron conforme, lo aprueban en la forma como está redactada y firman por ante mí el suscrito Notario que doy fe y por ello la autorizo, expidiendo primera copia a favor del interesado de conformidad con el Artículo 88 del Decreto Ley 1250 de 1970. ----

DERECHOS CANCELADOS SEGUN LA RESOLUCION NUMERO 00387 DEL 23 DE ENERO DE 2023 DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO \$74.900,00.-----

RECAUDOS DE LA SUPERINTENDENCIA Y FONDO ESPECIAL DE NOTARIADO Y REGISTRO \$15.900,00.-----

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR SERVICIOS, DECRETO LEY 624 DE 1989 ARTICULO 42º, LITERAL B, ESTATUTO TRIBUTARIO MODIFICADO POR LA LEY 6ª DEL 30 DE JUNIO DE 1992 ARTICULO 25 \$22.097,00. -----

RETENCIÓN EN LA ENAJENACION DE ACTIVOS FIJOS DEL 1% DEL VALOR



US 11-13

cadena

DE LA ENAJENACION, LEY 55 DEL 18 DE JUNIO 1985 ARTICULO 4ª, EN
CONCORDANCIA CON EL ESTATUTO TRIBUTARIO DECRETO 624 DEL 30 DE
MARZO DE 1989 \$NO CAUSA.-----

Se deja impresa la huella digital del dedo índice derecho al pié de las firmas en la
presente escritura y se anota en **TRES (3) HOJAS** de papel notarial series
números **Aa 090479110 – Aa 090479111 – Aa 090479112.**



CARLOS ANDRES MARROQUIN LUNA

Representante legal del Departamento del Putumayo

NIT No. 800094164-4

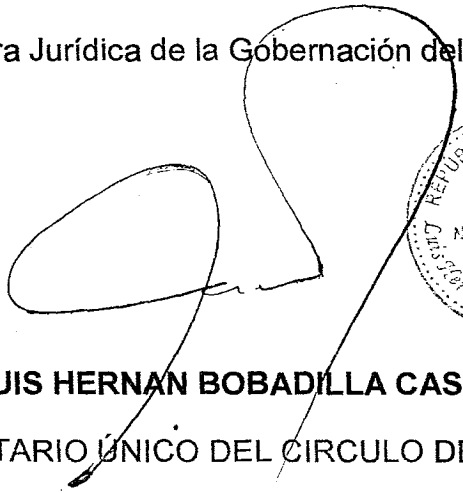
EL(LA) PODERDANTE



ANDRES PABLO DE JESUS RODRIGUEZ SOSA

EL(LA) APODERADO(A)

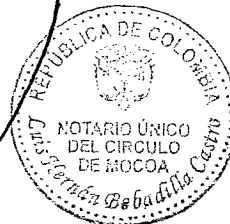
Jefe de la oficina Asesora Jurídica de la Gobernación del Putumayo

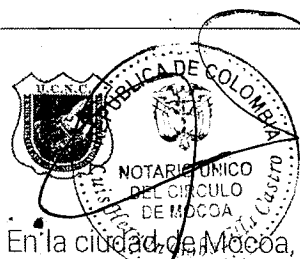


Interesado

LUIS HERNAN BOBADILLA CASTRO

EL NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE MOCOA





AUTENTICACIÓN BIOMÉTRICA PARA ESCRITURA PÚBLICA



C#45785

COD 7577

En la ciudad de Mocoa, Departamento de Putumayo, República de Colombia, el diez (10) de enero de dos mil veinticuatro (2024), en la Notaría única de mocoa del Círculo de Mocoa, compareció: ANDRES PABLO DEL JESUS RODRIGUEZ SOSA, identificado con Cédula de Ciudadanía / NUIP 0080375083.



57ab190a42

10/01/2024 15:53:26

----- Firma autógrafa -----

Conforme al Artículo 18 del Decreto - Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Acordada la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Para acta, que contiene la siguiente información PODER GENERAL E.P 8 DEL 10/01/2024.



LUIS HERNAN BOBADILLA CASTRO

Notario Único del Círculo de Mocoa , Departamento de Putumayo
Consulte este documento en <https://notariid.notariasegura.com.co>

Número Único de Transacción: 57ab190a42, 10/01/2024 15:53:40



AUTENTICACIÓN BIOMÉTRICA PARA ESCRITURA PÚBLICA



COD 7575

En la ciudad de Mocoa, Departamento de Putumayo, República de Colombia, el diez (10) de enero de dos mil veinticuatro (2024), en la Notaría única de Mocoa del Circuito de Mocoa, compareció: CARLOS ANDRES MARROQUIN LUNA, identificado con Cédula de Ciudadanía / NUIP 1124848005.

cadena.



ee2c02505a

10/01/2024 15:49:39

----- Firma autógrafa -----

Conforme al Artículo 18 del Decreto - Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Acordada la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Esta acta, que contiene la siguiente información PODER GENERAL E.P 8 DEL 10/01/2024.



LUIS HERNAN BOBADILLA CASTRO

Notario Único del Circuito de Mocoa, Departamento de Putumayo
Consulte este documento en <https://notariid.notariasegura.com.co>

Número Único de Transacción: ee2c02505a, 10/01/2024 15:53:40

República de Colombia

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificaciones y documentos notariales

11373G4KGK



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL PUTUMAYO

CARLOS
MARROQUI
GOBERNADOR
2024 / 2027

DESPACHO DEL GOBERNADOR

DECRETO No. **022**

02 ENE 2024

Por medio del cual se hace un nombramiento ordinario

El Gobernador del Putumayo, en ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y en especial de las que le confiere el Art. 305 de la Constitución Política, Ley 909 de 2004, Decreto 1083 de 2015, Decreto 648 de 2017, y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto No. 0188 del 10 de junio de 2021, se ajustó el Manual Especifico de Funciones, Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de la Gobernación del Putumayo.

Que en el Decreto 0232 del 05 de agosto de 2019 se encuentra detallado el empleo denominado Jefe de Oficina, Código 115, Grado 01, Oficina Asesora Jurídica, el cual se encuentra en vacancia definitiva.

Que el Decreto 648 de 2017 en el capítulo 1 Nombramiento y Posesión, Artículo 2.2.5.1.2 Faculta a los Gobernadores nombrar a los empleados bajo su dependencia.

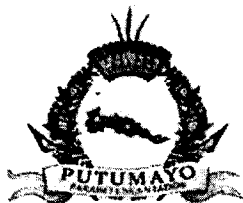
Que el Decreto en comento, en el Artículo 2.2.5.3.1 establece: *Provisión de las vacancias definitivas. Las vacantes definitivas en empleos de libre nombramiento y remoción serán provistas mediante nombramiento ordinario o mediante encargo, previo cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del cargo.*

Que por solicitud expresa del señor Gobernador, la Profesional Especializada de la Oficina de Gestión Humana, realizó el estudio de la hoja de vida de ANDRES PABLO DE JESUS RODRIGUEZ SOSA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.375.083 de Gacheta, quien mediante su verificación del 2 de enero de 2024 certifica que cumple con los requisitos y el perfil requerido para ejercer el empleo Jefe de Oficina, Código 115, Grado 01, Oficina Asesora Jurídica, exigidos en el Manual de Funciones y Competencias Laborales de la Gobernación del Putumayo y demás normas que regulan la materia.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO. Nombrar con carácter ordinario a ANDRES PABLO DE JESUS RODRIGUEZ SOSA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.375.083 de Gacheta, para desempeñar el cargo de Jefe de Oficina, Código 115, Grado 01, Oficina Asesora Jurídica, de la Planta de Personal de la Gobernación del Putumayo, con una asignación básica mensual de OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS (\$8.461.592) M/CTE.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO

CARLOS
MARROQUÍN
GOBERNADOR
2024 / 2027

DESPACHO DEL GOBERNADOR

DECRETO No. **022**
(**02 ENE 2024**)

Por medio del cual se hace un nombramiento ordinario

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el presente Acto Administrativo a ANDRÉS PABLO DE JESÚS RODRÍGUEZ SOSA para efectos de aceptación del nombramiento.


ARTÍCULO CUARTO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Mocoa, a los

02 ENE 2024


CARLOS ANDRÉS MARROQUÍN LUNA
Gobernador del Putumayo

Elaboró	Luz Adriana Santacruz Mejía	Profesional Especializada	Oficina Gestión Humana	
Revisó	Jorge Alberto Loaiza Valencia	Profesional Universitario	Despacho del Gobernador	

REPUBLICA DE COLOMBIA



DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

ACTA Nro. 017

NOMBRES Y APELLIDOS Andrés Pablo de Jesús Rodríguez Gosa.
En la ciudad de Mocoa, el día Dos (02) del mes de Enero

del dos mil (2024) se presentó en la oficina del Despacho Departamental Andrés Pablo de Jesús Rodríguez Gosa. con el objeto de tomar posesión del cargo de Asesoría Asesora Jurídica Código 115, 600, 01 para el cual fue nombrado por Decreto N° 022 de fecha 02 de Enero de 2024.

con una asignación mensual de \$ 8.461.592,00. El Sr. Gobernador del Departamento del Putumayo Carlos

Andrés Marroquín Luna le recibió la promesa legal del juramento en virtud de lo ordenado en el Artículo 47 de Decreto 1950 del 13 de Septiembre de 1973; bajo cuya gravedad prometió desempeñar bien y fielmente los deberes que el cargo le impone. El posesionado presentó los siguientes documentos: C.C Nro. 80.375.083 de Cacheta (C) Libreta Militar Nro.

Distrito Militar Nro. (Mayor 50) Constancia de

NOTA:

Para constancia se firma en Mocoa, a los

EL GOBERNADOR DEL PUTUMAYO

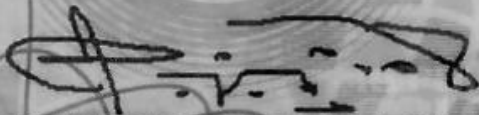
EL POSESIONADO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80.375.083**
RODRIGUEZ SOSA

APELLIDOS
ANDRES PABLO DE JESUS

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-MAY-1964**
SAN BERNARDO
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68

ESTATURA

O+

G.S. RH

M

SEXO

14-ENE-1983 GACHETA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500100-00002381-M-0080375083-20080329

0000063165A 1

1990013665

REGISTRARIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

212321

**REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL**

**CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
TARJETA PROFESIONAL DE ABOGADO**

116784

Tarjeta No.

26/08/2002

Fecha de
Expedición

29/07/2002

Fecha de
Grado

**ANDRES PABLO DE JESUS
RODRIGUEZ SOSA**

80375083

Cedula

CUNDINAMARCA
Consejo Seccional

COOPERATIVA BOGOTA
Universidad



Bas. J. N. R.
Presidente Consejo Superior
de la Judicatura

[Handwritten signature]

FESR SA

07/002 25913

3

**ESTA TARJETA ES DOCUMENTO PUBLICO
Y SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA
LEY 270 DE 1996, EL DECRETO 196 DE 1971
Y EL ACUERDO 180 DE 1996.**

**SI ESTA TARJETA ES ENCONTRADA, POR
FAVOR, ENVIARLA AL CONSEJO SUPERIOR
DE LA JUDICATURA, UNIDAD DE REGISTRO
NACIONAL DE ABOGADOS.**